



Universidad
de Navarra

PROGRAMAS
MÁSTER

Instituto de Ciencias para la Familia
Máster Universitario en Matrimonio y Familia

TRABAJO DE FIN DE MASTER

Curso Académico: 2017-2018

LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN MÉXICO. UN ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS EXISTENTES

Nombre: Gabriela Hernández Zapata

Dirigido por: D.^a Carolina Montoro Gurich



Universidad de Navarra

Master en Matrimonio y Familia

Trabajo de Fin de Máster

La protección de la familia en México. Un análisis de las políticas existentes

Gabriela Hernández Zapata

Directora del trabajo: Carolina Montoro Gurich

Pamplona

Septiembre 2018



La protección de la familia en México. Un análisis de las políticas existentes

Gabriela Hernández Zapata

Directora del trabajo: Carolina Montoro Gurich

2018

Índice

Introducción	5
1. Metodología	8
2. Bienestar social en América Latina	10
2.1. Antecedentes	10
2.2. Regímenes de bienestar	12
2.3. La desigualdad en América Latina	18
2.3.1. El gasto social. Desafíos para el financiamiento de las políticas	21
3. Los hogares en México	26
3.1. Características sociodemográficas y económicas	26
3.1.1. Población según su situación en el mercado laboral	28
3.1.2. Hogares según situación económica	32
3.2. Familia y cohesión social	37
3.3. Usos del tiempo	44
4. Políticas sociales y familia	48
4.1. Familia y funciones de la familia	48
4.2. Política familiar: concepto, principios y bases	51
4.3. El marco legal y político de la familia en México	54
4.4. El caso mexicano: ¿Políticas sociales o políticas familiares?	61
5. La articulación de las políticas de atención a la familia en México	66
5.1 El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).....	68
5.2. Recursos económicos públicos destinados al desarrollo social.....	78
5.3. Población atendida en alojamientos de asistencia social	81
5.4. El Frente Nacional por la Familia: un ejemplo de acción desde Tercer Sector	86
6. Conclusiones	89
Bibliografía.....	96

Introducción

La institución familiar, históricamente ha generado y operado unas funciones específicas que le son propias, como la procreación, el cuidado sin remuneración de sus integrantes, la formación en valores humanos universales, la provisión de afecto, etc. Su presencia y dinamismo en la sociedad es esencial y requiere de protección en su mismo ámbito y en el ámbito público, dado que contribuye de manera positiva en el desarrollo social.

A su vez, el hecho de que la familia requiera resolver sus problemas significa que, en no pocas ocasiones, la familia requiere ayuda porque es verdad que no se prepara para ser cónyuge, ni padre, ni madre. Además, no se prepara para fundar una familia. Todo esto, es el reflejo de que la familia es una sociedad activa y en transformación, que está cambiando en su conformación, estructura y que vive tiempos acelerados de cambio tecnológico, económico, político, en las relaciones sociales, etc.

El presente Trabajo de Fin de Máster tiene el objetivo de analizar cómo se trata y se protege a la familia en México, a partir de la política social existente. Es menester que el trato a la familia sea justo, por su valor trascendente como institución, y que contribuye a la sociedad, es decir, en principio debe haber una corresponsabilidad en la política y en la política social, en cuanto a la protección de la familia y de la familia misma. Además, el mercado conlleva una implicación o responsabilidad hacia la familia. Sin embargo, el trabajo se centra, por su impacto, en la forma en que la institución gubernamental mediante las políticas actuales, especialmente, las políticas sociales, influyen en favorecer, o dificultar las funciones radicales de la familia que ha realizado a través de la historia, y por tratarse de una realidad histórica, no depende de ideologías ni de doctrinas de ninguna naturaleza. Por tanto, el trabajo realiza un estudio, por un lado, de la importancia de la familia en la sociedad mexicana, importancia que

justifica su valoración como uno de los pilares del Estado de bienestar, y por otro, el tratamiento actual que el pilar del bienestar Estado brinda a la familia, a fin de identificar las fortalezas, áreas de mejora y retos que quedan a cada uno de los pilares en cuestión. Pues estas dos fuerzas fundamentales del estado Estado de bienestar social se unen, y si falla uno, el otro se ve afectado, provocando graves problemas sociales, como se observa en este análisis. De modo que la corresponsabilidad es compartida, fundamentalmente entre el Estado y la familia a efecto de un desarrollo social continuo y permanente.

En el primer capítulo, se describe la metodología de análisis, en el segundo, los antecedentes de los regímenes de bienestar social en América Latina y los desafíos para el financiamiento de las políticas. El tercer capítulo se refiere a las características de los hogares en México, donde se muestra claramente, con datos estadísticos y resultados de encuestas recientes, una panorámica sociodemográfica, cómo son los hogares y sus integrantes, en qué se ocupa la población, cuánto tiempo dedican a las actividades que realizan y qué visión tienen los jóvenes de la contribución de la familia a la cohesión social. Se denota que las familias contribuyen altamente a la economía del país, de hecho el mercado considera a la familia como una unidad de consumo, aunque es mucho más que eso, tal cual se revisa en este trabajo, y se ha expresado antes, pues la riqueza que aporta la familia a la sociedad va más allá de bienes materiales, aporta, al mismo tiempo e igualmente, bienes no materiales porque satisface necesidades primarias de casa, vestido, alimentación y de desarrollo de la personalidad de sus integrantes.

En el capítulo cuarto se enmarca a la familia en el plano legal y político, con base en estudios científicos de la política familiar, que aportan los requisitos que debe cubrir una política familiar y se contrastan con la realidad de las políticas existentes. Asimismo en el último capítulo se relacionan las dimensiones que articulan las políticas de atención a la familia en México con la situación real respecto a la forma de operar la política social, en primera instancia, a través del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la

Familia, otras instituciones que se dedican a la asistencia social, y los recursos que se destinan al desarrollo social. En este capítulo se muestran esfuerzos que se hacen en favor de la familia de iniciativas privadas y el nivel de su atención desde el sector público y particular mediante asociaciones civiles, religiosas, entre otras. El trabajo finaliza con las conclusiones.

1. Metodología

El Trabajo de Fin de Máster se ha desarrollado con una metodología de análisis documental. Los documentos seleccionados se han clasificado para una interpretación del tratamiento de la familia en las políticas existentes. Las fuentes primarias consultadas para el capítulo: *Bienestar social en América Latina* han sido producto de una exhaustiva búsqueda en bases de datos de bibliotecas virtuales. Algunas de estas fuentes son documentos emitidos por las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y aportaciones de autores de referencia que han adaptado los estudios de Esping-Andersen para Europa a los regímenes de bienestar en América Latina.

En el capítulo *Los hogares en México*, se indagó principalmente en fuentes actuales que ha emitido el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en Aguascalientes¹, México. Varias de estas fuentes son resultados de encuestas nacionales entre las que destacan: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017; actualizaciones de la medición de la economía informal 2017; características sociodemográficas de los hogares en México y su tipo de estructura o conformación 2015; la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2016; la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014.

Para el capítulo *Políticas sociales y familia*, se indagó en indicadores de bienestar subjetivo de la población adulta en México, así como en textos vigentes de la ley mexicana, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 2012 a 2018; estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales 2013; el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018; regulaciones de la familia y la niñez en la Organización de los Estados Unidos Mexicanos; documentos emitidos por la Suprema Corte de la Nación 2011; colecciones de textos jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¹ Aguascalientes es el Estado mexicano donde se encuentra la sede del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), desde 1985.

Para el capítulo *La articulación de las políticas de atención a la familia en México* fueron analizados los resultados del Censo de Alojamientos de Asistencia Social aplicado en 2015; la Ley Federal del Trabajo vigente a 2017; la Plataforma del Frente Nacional por la Familia 2018; la Revista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 2017; temas de gastos e ingresos públicos en América Latina desde finales de los ochenta hasta 2015, publicados por la CEPAL y Naciones Unidas en 2018; presupuestos de egresos de la federación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estudios de especialistas en materia de política familiar y derecho familiar como Montoro Gurich, Barrios Baudor y Nanclares Valle, respectivamente; ejemplos de políticas familiares implantados en la Comunidad Foral de Navarra (España), entre otros.

2. Bienestar social en América Latina

2.1. Antecedentes

De acuerdo con Ubasart-González y Minteguiaga (2017), en América Latina se han comprendido los regímenes de bienestar a partir de la concepción europea, y de trabajos como los de Esping-Andersen en *The Three Worlds of Welfare Capitalism* y otros, que datan de los años noventa. Según estas autoras son tres los enfoques sobre los Estados de bienestar. El primer enfoque sostiene que el nivel de gasto refleja el nivel de compromiso con el sistema de bienestar, en consecuencia, las diferencias se dan por el grado de importancia a los aspectos que deben atenderse en la agenda pública de los países (Esping-Andersen, 2015. p. 132), quedando al descubierto la jerarquización del gasto que proyecta la importancia que atribuyen los administradores de los recursos económicos a los distintos rubros. Esto explica por qué, especialmente en países llamados “en vías de desarrollo”, se gasta más en privilegios de funcionarios que en la evidente y apremiante asistencia social que equivale a un derecho ciudadano.

En segundo enfoque, de Titmuss (1958), aporta otra distinción entre Estados de bienestar residuales e institucionales. El Estado de bienestar es residual cuando asume la responsabilidad si la familia “falla” o el mercado y su intervención no va más allá de marginados, excluidos; el Estado de bienestar es institucional cuando es proactivo, comprometido con las necesidades y demandas de todos los estratos de la población, por tanto, contempla un principio de universalidad y un pacto social de protección social (citado en Ubasart-González y Minteguiaga, 2017, p. 216). El tercer abordaje de Esping-Andersen postula que, si la ciudadanía social constituye el centro de la formación estatal del bienestar, ésta debe integrar la “concesión de derechos sociales”. Por tanto, si los derechos sociales son legítimos y se equiparan a los derechos de propiedad por el hecho de ser ciudadanos, y como tales, igual y universalmente reconocidos, esta condición, no depende del comportamiento de los individuos en el

mercado. De manera que esto supone la desmercantilización de las personas respecto al mercado (2015).

De esta forma, concluyen Ubasart-González y Minteguiaga (2017), las dimensiones de ciudadanía social, las actividades del Estado, la familia y la comunidad, pasan de ser excluyentes a complementarias. Surge de estos postulados del autor danés el concepto de régimen de bienestar puesto que la tipificación del bienestar obedece a ordenamientos y principios diferentes entre las dimensiones señaladas para la provisión del bienestar, entre los cuales interactúa lo legal y lo organizativo, lo público y lo privado. La autora del trabajo considera que en la práctica se ha infravalorado la esfera privada de lo familiar y el reparto de la prestación de bienestar entre el Estado, el mercado, la sociedad y la familia ha sido debilitado a través de las políticas públicas, situación que puede interpretarse como una infravaloración de la familia en relación a los otros pilares del Estado del bienestar. La dificultad de la caracterización de Esping-Andersen al régimen de bienestar, entendido como “la forma conjunta e interdependiente en que se produce y se distribuye el bienestar por parte del Estado, el mercado y la familia”, (Social Foundations of Postindustrial Economies (1999, publicado en castellano en 2000, citado en Ubasart-González y Minteguiaga, 2017, p. 217) radica en centrar la atención en la división del trabajo entre estados y mercados en la provisión de bienestar, más que en las relaciones entre estados, mercados y familias. “De hecho, la distinción entre lo público y lo privado se considera una distinción entre la política y el mercado y las familias son ignoradas en tanto se las concibe como proveedoras “privadas” de bienes y servicios de bienestar. Incluso, la prestación de asistencia social sólo cuenta cuando se produce a través del Estado o el mercado, mientras que el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar se ignora” (Orloff, 1993, p. 303).

Esping-Andersen reconoce la crítica e incorpora el término “desfamiliarización”, no entendido como “antifamiliar”, sino como el grado en que la política social libera a la mujer de su responsabilidad tradicional como proveedora de bienestar, lo que hace a la

mujer autónoma para poder “mercantilizarse”, o lograr entrar al mundo del mercado (2015, pp. 126-132). La autora apunta que las implicaciones de no contar el trabajo de las mujeres o el trabajo familiar como una fuente generadora de bienestar social puede acarrear problemas de desigualdad entre las responsabilidades de los hombres y las mujeres en la familia, la conciliación del trabajo dentro y fuera de casa, sobre todo de las madres. Además, en la familia se genera un bienestar que no se genera en las otras esferas del bienestar que pudiera prever el Estado o el mercado, puesto que la familia provee directa y habitualmente, no sólo de bienestar material, sino también de bienestar inmaterial, como la educación informal, la seguridad personal, la transmisión de los valores, de la cultura, de las tradiciones de una generación a otra, etc.

En el siguiente apartado se explican a grandes rasgos las clasificaciones de los regímenes de bienestar en América Latina y el énfasis de los sistemas de seguridad social en estos países que favorece o perjudica el desarrollo comunitario. En principio, los países desarrollados han logrado un mejor nivel de vida, una repartición más equitativa de la riqueza y menores índices de pobreza, pero faltaría valorar el nivel de atención al pilar del bienestar de la institución familiar que, en los países latinoamericanos, está devaluado. Algunos datos concretos referentes a la pobreza, al trabajo informal y otros, enmarcados en países latinoamericanos, y concretamente en México, se analizarán a lo largo del presente trabajo.

2.2. Regímenes de bienestar

Los principales autores que realizaron las primeras clasificaciones del Estado social y la introducción del concepto de régimen de bienestar en América Latina son: Mesa Lago (1980); Filgueira (1998); Adelantado, Noguera y Rambla (2000); y Martínez Franzoni (2007, 2008). Mesa Lago, en la década de 1980, clasifica a los países de América Latina en tres grupos: pionero-alto, intermedio y tardío bajo. Los países del primer grupo (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay) fueron los primeros en contar con sistemas de seguridad social entre 1920 y 1930, con mayor cobertura y desarrollo,

aunque con problemas de estratificación, altos costos, déficit creciente y desequilibrio financiero. En el segundo grupo se encuentran: Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela, comenzaron entre 1940 y 1950, con una cobertura y desarrollo medio, con un costo menor, pero mejor situación financiera. Los países que forman parte del tercer grupo son: El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, y República Dominicana, en las décadas de 1960 y 1970, con sistemas más unificados y con menos problemas financieros, pero con menor cobertura y desarrollo. (2005, pp. 14-15).

Por su parte, Filgueira (1998), uno de los pioneros en aplicar las aportaciones de Titmuss (1958) y Esping-Andersen (1993, 2000) a la realidad Latinoamericana mediante actualizaciones sobre los contextos locales, identificó en sus hallazgos tres patrones, según su grado de protección, rango de beneficios, condiciones de acceso, estratificación de servicios y reproducción o alteración de la estratificación social inicial. Los países con patrón universalista estratificado eran: Uruguay, Argentina y Chile, con políticas de bienestar amplias pero divididas conforme al tipo de ocupación. Los países con patrón “dual”: Brasil y México que combinaban universalismo estratificado en sectores urbanos y exclusión en sectores rurales. Los países con esquemas “excluyentes”, con Estados reducidos y casi nula asignación de recursos serían República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Martínez Franzoni (2008) sostenía que estos estudios carecían de suficiente sustento teórico y empírico, debido a que la unidad de análisis seguía siendo el Estado antes que el régimen de bienestar, tampoco se ponía excesiva atención en la informalidad de los mercados de trabajo, y la debilidad del Estado se notaba en la influencia de la introducción de reformas provenientes de Washington, con resultados de beneficio para el comercio exterior y de perjuicio para los países Latinoamericanos, generando incremento de la pobreza y la desigualdad. Aunado a lo anterior, las consecuencias que identificaron otros autores (Adelantado, Noguera y Rambla, 2000), se reflejaban en que

el Estado dejó de desarrollar funciones sociales y económicas en muchos países de América Latina, y se llevaron a cabo precariamente por organizaciones sociales, organismos internacionales, empresas y familias. Apremia que los regímenes de bienestar en América Latina atiendan a las características, las necesidades, las realidades y los contextos propios para lograr los resultados esperados y evitar el rezago respecto a las transformaciones actuales, la debilidad de la institucionalidad estatal, la dificultad de producción de política pública nacional, la informalidad en el mercado de trabajo, y el peso que se le da a la familia como proveedora de bienestar y cuidados (Ubasart-González y Minteguiaga, 2017). No significa con esto el absoluto desconocimiento de la familia como institución proveedora de bienestar y cuidados, esta función la realiza de manera natural, se trata más bien de evitar que el Estado descargue la responsabilidad que le corresponda en su función de proveer dichos bienes, dentro de su jurisdicción y obligación.

Martínez Franzoni (2008) despliega otro de los primeros intentos relevantes por abordar los tipos de regímenes de bienestar en América Latina. Como introducción a su desarrollo apunta lo siguiente: el enfocarse en el gobierno empobrece el análisis de políticas porque esta esfera tiene efectos de segundo orden en los mercados y en las familias, puesto que si el gobierno no abaste de cuidados a los integrantes dependientes de las familias, recién nacidos, o adultos mayores, el mercado y las mismas familias normalmente lo resolverán utilizando sus propios medios. Se ha expuesto que si uno de los pilares del bienestar es incapaz de responder, otro de los pilares absorbe la responsabilidad con sus propios recursos y estrategias, quedando en tela de juicio si es la opción más deseable (Esping- Andersen, 2002, en Martínez Franzoni, 2007). Martínez Franzoni asevera que el día a día es complicado, de lo cual derivan incertidumbres sobre las capacidades para comprar el alimento, las capacidades y condiciones para vivir la vejez, etc. Esto conlleva probabilidades y riesgos “perder capacidades (o ganarlas), son los binomios que nos interesan: la incertidumbre, y su respuesta, es decir, el manejo de riesgos. Esto que acá llamamos bienestar en tanto capacidad” (Martínez Franzoni, 2007, p. 1). Son numerosos los riesgos en ámbitos

como: la carencia de acceso a la educación básica y a los servicios de salud, la autonomía económica de las mujeres, la inestabilidad de las relaciones conyugales, los bajos salarios, entre otros.

En este sentido, llama la atención que, en 2016 el 30,7% de la población, 186 millones de personas, vivía en condiciones de pobreza (CEPAL, 2017), siendo América Latina, la región más desigual del mundo. Esto significa que la organización familiar se ajusta a cómo hacer frente a la pobreza y la desigualdad, y explica el frente que también hacen las mujeres para mantener a su familia, así como la reducción en el número de hijos. Ante este panorama Martínez Franzoni intenta dar respuesta a algunos de estos cuestionamientos: ¿Por qué se caracteriza la producción del bienestar en América Latina hoy? ¿En qué medida la respuesta a esta pregunta varía según países? ¿Hay tendencias comunes entre grupos de países? ¿Cómo se asignan recursos a través del trabajo no remunerado? ¿Se puede hablar de tipos de régimen de bienestar que caractericen las condiciones sociales de la población? La investigación de la autora no ha pretendido resolverlas sino plantear una línea de investigación sobre modelos distributivos en América Latina. Lo hace a partir de literatura sobre regímenes de bienestar, entendidos como constelaciones de relaciones entre mercados, trabajo no remunerado y acceso a bienes públicos propuesto por Esping-Andersen (1999-2002). Cabe mencionar que otros estudios feministas relacionados con los regímenes de bienestar muestran vacíos teóricos pues estudian el Estado antes que el régimen de bienestar y establecen generalizaciones basadas en pocos países.

Los tipos de regímenes de bienestar explorados en 18 países latinoamericanos (Martínez Franzoni, 2007), se han analizado a partir de las prácticas de asignación de recursos que incluyen, pero trascienden al Estado. Basados en un análisis estadístico y de la identificación de conglomerados, se caracterizan los siguientes tipos: el estatal productivista, el estatal-proteccionista y el familiarista. Las dimensiones que operacionalizan los regímenes son, en primer lugar, el grado de mercantilización. Se valora a través de indicadores de acceso al mercado laboral (ocupación o desempleo),

los tipos de acceso con distintas variedades de protección social y, los ingresos en el país por remesas. Se suma la consideración de la población rural, al crear condiciones para el manejo de riesgos, reduciendo la dependencia sobre los ingresos y aumentando la dependencia sobre la producción para el autoconsumo.

La segunda dimensión es la desmercantilización del bienestar, reflejada en la autonomía del intercambio mercantil por la reasignación de recursos que realizan las políticas públicas. Los indicadores de la desmercantilización son la cobertura, el gasto público y los criterios de acceso a la inversión pública, el gasto y el consumo privado (Esping-Andersen, 1990, en Martínez Franzoni, 2007). La tercera dimensión es el grado de familiarización del bienestar, “su autonomía entre la disponibilidad del trabajo femenino no remunerado basado en la división sexual del trabajo” (Orloff, 1993, en Martínez Franzoni, 2007, p. 12). Por la ausencia de datos relativos al uso del tiempo que imposibilita comparar países, se explora a través de aproximaciones como la presencia de cónyuges sin trabajo remunerado, de familias extensas y de servicio doméstico, y la ausencia de guarderías o regulaciones como las licencias por maternidad.

En el primer régimen de bienestar, el estatal productivista, se encuentran Argentina y Chile, en el segundo, el estatal-proteccionista, se ubican Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay. En el último, el familiarista, están Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Es de esperarse que entre todos los países existen diferencias, aún perteneciendo al mismo régimen, así se explica que un país pueda manifestar menor o mayor grado de mercantilización o mayor o menor grado de trabajo femenino no remunerado. (CEPAL, 2017, p. 15).

Ante las preguntas planteadas por Martínez Franzoni (2007), se concluye que no existen relaciones armónicas de los regímenes entre los países, contrariamente, se dan tensiones entre prácticas de asignación de recursos que aumentan cuando más débiles son unas frente a otras. Destaca el apunte que hace la autora sobre la disminución de la

familiarización del bienestar por causas no debidas a la elección sino a la necesidad económica, en medio de una informalización de las relaciones laborales, bajos salarios y escasa inversión pública, al mismo tiempo que se demanda el trabajo no remunerado por la presencia de niños menores de 12 años en las familias. De esta forma se abre paso al autoempleo para compensar las fallas del mercado laboral y del sector público, fenómeno que puede llegar a ser no únicamente transitorio sino permanente: “Es a esta ampliación del ámbito doméstico y del trabajo no remunerado, en tanto esfuerzo para adaptarse y compensar insuficiencias de los mercados laborales y de las políticas públicas, a los que se alude como “informalidad” del bienestar”. (Martínez Franzoni, 2017, p. 22-23).

Por ello se explica que los regímenes latinoamericanos son especialmente informales, pues, en ninguna de las tipificaciones que han realizado los diversos autores, “una proporción de la población no puede... lidiar razonablemente con los riesgos sociales a través de su participación en los mercados laborales o en los servicios públicos” (Gough y Wood, 2004 en Martínez Franzoni, 2017, pp. 23-24). Esto significa que, en países como México, donde un gran porcentaje de la población trabaja de manera informal, depende de arreglos acuerdos familiares o de la propia organización cuando se atienden las responsabilidades laborales, a causa de las políticas públicas ineficientes o inexistentes en cuanto a la protección de la familia, lo que equivale a que la familiarización prima o desempeña un papel esencial, no valorado al no ser remunerado, (Martínez Franzoni, 2017). Algunos indicadores sociodemográficos, económicos y del uso del tiempo en los hogares dan cuenta de manera más clara del papel central que desempeña la familia como pilar del bienestar no sólo material, sino también inmaterial, de apoyo en el cuidado de sus integrantes, como se mostrará en apartados subsecuentes.

2.3. La desigualdad en América Latina

Se ha afirmado anteriormente que uno de los factores que perjudican a la población en América Latina es la desigualdad en la distribución del ingreso, hecho que es generalizado a las distintas fuentes de ingreso de los hogares, principalmente a los ingresos laborales (tanto de los asalariados como del trabajo independiente), las jubilaciones y las transferencias. El nivel de desigualdad ha aumentado, sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017). Asimismo, la CEPAL considera que uno de los pilares fundamentales para reducir la desigualdad es lograr la autonomía de las mujeres, en particular su autonomía económica. Para la CEPAL (2017) existe evidencia empírica suficiente de que el aumento de la participación y de los ingresos laborales de las mujeres tiene efectos significativos en la reducción de la pobreza y de la desigualdad de los ingresos. En general, las mujeres tienen menor acceso a los recursos productivos y financieros, así como a los recursos monetarios, a la capacitación y al uso de tecnologías. Por otra parte, debido a su alta carga de trabajo doméstico no remunerado, disponen de menos tiempo para su uso personal, lo que atenta contra sus posibilidades de capacitarse y mantener una presencia continua en el mercado laboral.

Sin embargo, en opinión de la autora, se cuestiona ante esta postura de la CEPAL, y a la luz de las estadísticas, si realmente las mujeres preferirían dedicar más tiempo al trabajo y a su capacitación que a sus hijos menores de edad, y los efectos que conlleva en las relaciones familiares el pasar más horas del día fuera de casa que en el propio hogar, no sólo para la familia, sino para la plena realización de las mujeres como madres de familia, esposas, profesionales y en todas las variadas facetas que desempeñan. Porque si bien es cierto, que una de los ámbitos de crecimiento personal es el trabajo, otro, y el más importante, así valorado en estadísticas de México, como se verá en los próximos capítulos, es el ámbito familiar.

En esta apreciación de la CEPAL se debe ser cautelosos al valorar lo económico o material sobre lo familiar. Por supuesto, los integrantes de una familia necesitan solventar sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación; sin embargo, conviene hacer un balance entre las demandas familiares y el mercado laboral, que es lo que contempla la política familiar, como se verá más adelante. Así pues, las políticas sociales tendrían que responder a desigualdades, no sólo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. El estudio de *Global Wealth Report 2016* de Credit Suisse, reporta que la riqueza en el mundo está muy mal distribuida: el 0,7% de los adultos (35 millones de personas) concentran casi la mitad (45%) de los activos físicos y financieros del mundo; un total de 123.000 personas con un muy elevado patrimonio (que poseen más de 30 millones de dólares) acaparan el 9% de la riqueza mundial y 1.722 pertenecen al selecto grupo de los milmillonarios. (CEPAL, 2017).

Las investigaciones en México sobre la distribución de la riqueza, posiblemente sean extensibles a otros países de la región. En 2015, el Gobierno mexicano administraba el 23% de los activos, las empresas privadas el 19%, las empresas públicas autónomas el 9% y las instituciones financieras el 5%, al mismo tiempo que el 7% de los activos financieros estaban en posesión de extranjeros. Las familias concentraban la mayor proporción, un 37% equivalente a 28 billones de pesos mexicanos, sin embargo, su repartición se desigual. Dos terceras partes de estos activos físicos y financieros está en manos del 10% de las familias del país, el 1% de las familias concentran más de un tercio. La repartición de los activos financieros es más desigual: el 80% es propiedad del 10% más rico. (CEPAL, 2017, p. 18).

Una de las matrices de la desigualdad social, que es una consecuencia de la desigualdad económica, es la edad. Otras son las formas en que instituciones y sistemas de distribución de recursos, como el Estado, el mercado y la familia, generan procesos de diferenciación social entre grupos de la población en función de la etapa de vida en la que se encuentran (CEPAL, 2016). Por ejemplo, en México, un profesor en activo del sistema público puede percibir un sueldo digno, pero su situación cambia radicalmente cuando se jubila, puede que en esta etapa reciba por jubilación menos del 50% del sueldo que percibía como profesor en funciones.

Además de las desigualdades entre las personas situadas en diferentes etapas del ciclo de vida, también son observables amplias brechas entre las personas situadas en la misma etapa del ciclo de vida, en particular en función del estrato socioeconómico, el sexo, la condición étnica y racial y el territorio. Dado este enfoque, es importante pensar en la desigualdad como resultado de procesos acumulativos en el tiempo de decisiones, carencias, ventajas, eventos y experiencias que se articulan con los arreglos institucionales y el contexto social y económico (Gibbs y Eaton, 2014, en CEPAL, 2017, p. 24).

En contraposición, el nivel educativo es uno de los factores que más influyen en las oportunidades de empleo, ingresos, salud, vivienda y otros beneficios individuales y sociales a lo largo de su vida (Espinola y Claro, 2010, en CEPAL, 2017).

Otro desafío importante es el de los jóvenes en proceso de emancipación que no estudian ni trabajan, lo que contribuye a la desigualdad. Se suma a las desigualdades sociales que la región está en un periodo de transformación demográfica por el envejecimiento de la población, que conlleva cambios en las dinámicas familiares, el sostenimiento material de las pensiones, las enfermedades propias de la edad y la autonomía física e intelectual. Otro de los desafíos para la inclusión social es, asimismo, la desigualdad que experimentan las personas indígenas. Es claro que cada etapa de la vida y las regiones de asentamiento de la población, demandan unas necesidades y riesgos específicos a cubrir por la vía de la articulación de las políticas orientadas a las distintas etapas. (CEPAL, 2017).

Otro factor que abre la brecha entre las desigualdades es la omisión de la distribución del tiempo como recurso imprescindible para el bienestar social de las personas, por lo que hace falta enfrentar la problemática con políticas públicas innovadoras que ubiquen la distribución del tiempo y del trabajo no remunerado en el centro de su diseño (CEPAL, 2017).

Ante este panorama, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible expresa el compromiso internacional de frenar el avance de la desigualdad con el objetivo de Desarrollo sostenible (ODS), número 10. Los objetivos específicos de este rubro son: (CEPAL, 2015, en Naciones Unidas y CEPAL, 2017, pp. 49-50).

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas, y medidas adecuadas a este respecto.

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones.

Estos objetivos expuestos en el documento *Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* del año 2015 (en CEPAL y Naciones Unidas, 2017, pp. 49-50) son ambiciosas, así como urgentes de lograr. Asimismo, su nivel de planteamiento es genérico, sin una definición de cómo operarlos y con una omisión de los recursos económicos a invertir por los países en el futuro, delimitado a 2030, en consecuencia, siguen en la agenda varios desafíos para el financiamiento de las políticas.

2.3.1. El gasto social. Desafíos para el financiamiento de las políticas

Como se ha señalado, el régimen de bienestar es importante y operable en función del gasto que se contemple en las políticas correspondientes, puesto que significa el nivel de compromiso del Estado en el desarrollo del bienestar de la población. La inversión

social es uno de los medios de implementación más importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues se engarza directamente con el logro de avances en el acceso a servicios básicos como el saneamiento, la vivienda, la educación, la salud, así como a los sistemas de protección social con acceso garantizado y universal planteados en la Agenda 2030.

Considerando el conjunto de las economías, entre 2000 y 2015 los países de América Latina pasaron de destinar un 15,4% del PIB regional (promedio ponderado) al financiamiento de políticas públicas sociales a destinar un 20,7% del PIB regional. Al contrastar dichas cifras con los tamaños de la población regional, se observa que el monto *per cápita* dirigido a ese fin pasó de 1.397 dólares a 2.031 dólares constantes entre 2000 y 2015. La información da una idea general, pero no a profundidad, con relación al nivel de prioridad que tienen las políticas sociales al momento de distribuir y ejecutar los recursos dentro de cada país, ni tampoco permite un análisis comparativo entre los países de la región. (CEPAL 2016, p. 102).

El análisis más reciente en lo que respecta a los gastos e ingresos públicos en América Latina desde fines de los años ochenta hasta 2015 que ha concentrado la CEPAL (2018), da cuenta de lo acontecido en las últimas tres décadas. Refiere que ha habido modificaciones importantes en las formas de intervención pública de estos países que no han sido promovidos sólo por la política fiscal. Asimismo, apunta la CEPAL, que es un buen momento para hacer una revisión de lo sucedido, de lo que acontece actualmente de cara al futuro, en torno a los gastos y los ingresos públicos en los países de América Latina. “En un principio predominó la necesidad de hacer frente a la emergencia, luego la preocupación giró hacia la necesidad de mejorar la eficiencia y... llegó un periodo donde las cuestiones distributivas fueron las dominantes” (CEPAL, 2018, p. 7).

Estos objetivos no fueron logrados en su totalidad, entonces se demanda una visión que aprenda de cada una de las experiencias y lograr la mejora e impacto en la calidad y contundencia de las intervenciones del Estado en esta materia, en el desarrollo económico, la distribución del ingreso, la protección social universal, el desarrollo de capacidades, la sostenibilidad del medio ambiente, la modificación de hábitos de consumo y producción. El problema de fondo a tratar con estas medidas es la reducción

de la pobreza (CEPAL, 2018). Como se expuso en el apartado anterior, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, integra en sus 17 objetivos la intención de contrarrestar la pobreza. Corresponde a cada estado llevarlos a la práctica y realizar una evaluación de la repercusión en la población.

En el contexto latinoamericano, las políticas de gasto social son muy variadas, dependiendo del sector al que se aplique el gasto. En primer término, el gasto educativo en los tres niveles educativos: enseñanza básica, media y superior aumentó, en términos del PIB, en un 125% entre 1990 y 2015, hecho que demostró una creciente prioridad para el gasto en el sector educativo en las economías y sociedades de Latinoamérica. Durante los años noventa la orientación que siguieron muchos países latinoamericanos en búsqueda de la eficiencia fue la descentralización del gasto, aunque:

... muchas veces estos procesos de transferencias de responsabilidades de gasto a niveles subnacionales de gobierno han ocurrido en territorios con marcadas desigualdades, de manera que las brechas de desarrollo hacia el interior de cada país pueden haber derivado en un agravamiento de las diferencias internas al ser muy variadas las posibilidades financieras y de gestión de cada región al interior de los países. Dadas las desigualdades productivas y territoriales que caracterizan la situación latinoamericana y las diferencias en materia de capacidades de gestión y recursos humanos que dispone cada gobierno, resulta imposible pensar que se mejore la equidad mediante procesos de descentralización donde cada territorio debe atender a su población con sus propios recursos (CEPAL, 2018, pp. 17-18).

Entonces estas medidas de descentralización se revierten cuando las administraciones de cada región o entidad de los países desatienden la necesaria coherencia de las políticas sectoriales con las políticas públicas. La descentralización en México, por ejemplo, ha sido vivida en cierta medida como un “lavarse las manos” de parte del gobierno central, pues los recursos estatales no satisfacen las necesidades y se corren riesgos como el rompimiento de las líneas rectoras del gasto al carecer de un respaldo

integral central; otro de los riesgos o padecimientos con la descentralización del gobierno federal ha sido el desvío de fondos en varias provincias de México².

Así pues, los desafíos del gasto social se extienden no sólo al sector educativo sino a cualquier sector del gasto público, y uno de los desafíos pendientes de poner en marcha en su totalidad es compensar diferencias y articular políticas sectoriales que puedan tener un grado de descentralización con un eje común (Centrángolo y Goldschmit, 2011, citado en CEPAL, 2018). De lo contrario, “las regiones más pobres se ven particularmente perjudicadas ya que son las que presentan una base... más reducida para financiar las prioridades de gasto público local” (Centrángolo, Goldschmit y Jiménez, 2009, citado en CEPAL, 2018, p. 18).

A efecto de clasificar a los países por su nivel de erogaciones desde 1995 a 2015, la CEPAL (2018. p. 22) realizó un agrupamiento en porcentajes del PIB:

- Grupo A: Argentina y Brasil. Países con un nivel de gasto público superior al 40% del PIB. Estos siguen una trayectoria marcadamente más dinámica... en especial durante los últimos diez años.
- Grupo B: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Países con un nivel de gasto público entre 30% y 40% del PIB..., en los últimos años mostraron caídas.
- Grupo C: Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Países con un nivel de gasto público entre 20% y 30% del PIB que tienen una trayectoria muy similar al promedio regional.

² Para muestra, Bautista-Farías, J. (2018) documentó una lista de exgobernadores presos o con procesos judiciales con base en diversas fuentes periodísticas de México. Algunos de los exgobernadores son: Mario Villanueva Madrid (1999-2005), del PRI, preso por acusaciones con el narcotráfico y lavado de dinero en Quintana Roo; Roberto Borge Angulo (2011-2016), del PRI, preso por acusaciones de venta ilegal de terrenos, desvío de recursos públicos, endeudamiento en Quintana Roo; Cesar Duarte de Ochoa ((2010-2016), del PRI, preso por desvío de recursos públicos, narcotráfico, lavado de dinero, abuso de autoridad, etcétera, en Veracruz; Guillermo Padrés Elías (2009-2015), del PAN, preso y puesto en libertad por fallas en el proceso. Acusaciones: delincuencia organizada, lavado de dinero, desvío de recursos y defraudación fiscal en Sonora; Jesús Reyna García (interino: abril - octubre/ 2013), del PRI, preso, acusado de desvío de recursos públicos y vínculos con el narcotráfico en Michoacán; Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010), del PAN, acusado de peculado y uso indebido del servicio público. Se amparó y fue absuelto por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.

- Grupo D: Guatemala, Haití y Paraguay. Países con un nivel de gasto público menor al 20% y menores tasas de crecimiento económico.

Esta información requiere ser analizada desde las modificaciones que cada país ha realizado sobre el peso particular de las políticas públicas y de las propias estructuras, puesto que cada país ha realizado reformas variadas. Los principales lineamientos de reforma en las políticas de gasto público son: consolidar la inclusión educativa con mejoras en su calidad; reducir la fragmentación de los sistemas de salud y alcanzar la cobertura universal; asegurar niveles mínimos básicos de protección social y sistemas provisionales contributivos sostenibles para la población adulta mayor; generalizar niveles básicos garantizados de protección de ingresos a través de programas de transferencias monetarias; fortalecer la inversión pública re-orientándola hacia programas con mayor impacto para el desarrollo.

Entre las opciones previstas para las reformas en los ingresos públicos sobresalen: redefinir la imposición sobre las rentas generalizadas por industrias extractivas; fortalecer la tributación sobre los patrimonios; considerar la aplicación del impuesto sobre la transmisión gratuita de bienes; considerar la tributación sobre la nómina salarial de manera conjunta con los esquemas prestacionales; consolidar el IVA corrigiendo efectos distributivos adversos; redefinir los impuestos selectivos; combatir la evasión tributaria tanto a nivel doméstico como internacional; entender la complejidad y aceptar el desafío de las reformas a encarar (CEPAL, 2018).

En medio de las modificaciones que se han hecho a las prioridades de gasto de los ingresos económicos públicos en Latinoamérica, desde los años ochenta hasta 2015, siguen en la agenda los retos que se plantean para 2030, en el sentido de impactar, con medidas eficientes de distribución de los recursos, no únicamente en el desarrollo económico, sino en el desarrollo social de los países Latinoamericanos.

3. Los hogares en México

A continuación se analizan las características sociodemográficas y económicas de años recientes relacionadas con los hogares del país mexicano: la fecundidad, la distribución por edades de la población, la nupcialidad, la población según su situación laboral, la importancia del empleo en el mercado formal e informal, así como algunos aspectos de la cohesión social de las familias y el uso del tiempo en los hogares. El propósito es identificar algunas de sus necesidades, problemáticas y formas de organización en el entendido, como han sostenido los autores estudiados en el capítulo precedente, de que la institución familiar es uno de los pilares del bienestar social, por lo cual es fundamental atenderla, protegerla y fortalecerla desde las políticas públicas.

El análisis de esta dinámica sociodemográfica refleja los cambios de la sociedad y sirve para diseñar políticas sociales de atención a los distintos campos de las vidas de las personas. “Al transformarse la sociedad, también lo hacen las familias y, por supuesto, las relaciones entre la familia y los distintos agentes sociales” (Montoro Gurich, 2008, p. 27). Es importante esta mirada sociodemográfica de la familia, pues, además de que los ciudadanos siempre tendrán como referencia de origen a la familia, estos estudios sirven al gobierno para la toma de decisiones en los países y regiones con base en el comportamiento que reflejan las diversas dinámicas de esta primera sociedad familiar. Así, una de estas decisiones puede ser jerarquizar el gasto público en educación, salud, seguridad, etc., de acuerdo con las necesidades y carencias detectadas.

3.1. Características sociodemográficas y económicas

La información del contexto demográfico de México se concentra en la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014, y publicada en 2015a, que aplicó el

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGIa)³. La ENADID tiene el propósito de contar con información estadística del comportamiento de la dinámica demográfica del país en los rubros de: fecundidad, crecimiento de la población, nupcialidad, etc. El tamaño de la muestra nacional es de 101,389 viviendas urbanas y rurales. Datos de la ENADID muestran que en México residen 119.9 millones de personas, de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres. La estructura por edad confirma el proceso de envejecimiento por el que transita la población del país. De 2010 a 2014 la proporción de personas con menos de 15 años pasa de 28.9 a 27.5%, en tanto que la de jóvenes (15 a 29 años) disminuye de 26.4 a 24.9%. En cambio, el porcentaje de población de 30 a 59 años aumenta en dicho periodo de 34.4 a 36%, mientras que la de 60 años y más pasa de 9.1 a 10.9%. Los niveles de fecundidad en el país han mantenido un descenso constante desde finales de la década de 1960, en la cual la tasa de fecundidad fue de siete hijos por mujer; actualmente es de 2.21 (estimada para el trienio 2011 a 2013). De cada 100 mujeres de 15 a 49 años, 58 se encuentran unidas, en uniones libres o casadas; 33 son solteras y 9 están separadas, divorciadas o viudas.

La encuesta intercensal 2015b menciona que los hogares en México suman casi 32 millones, entre los que se distribuyen más de 119 millones de personas. Más de 22 millones y medio de hogares cuentan con jefatura masculina y más de 9 millones con jefatura femenina. Los tipos de hogares se clasifican en: nucleares (71.7%), ampliados (25.8%) y compuestos (2.5%). La clasificación por hogares parentales es: biparental (53.8%), consistente en la pareja unida o casada legalmente con o sin hijos; monoparental (18%) integrada por uno de los padres y uno o más hijos; otros (28.1%). Es decir, a nivel nacional predomina el hogar familiar nuclear, conformado por el padre, la madre y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear; le siguen los hogares familiares ampliados, formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera). Los datos más recientes del total de hogares, que aporta el INEGI, en

³ La próxima aplicación de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) se realizará en 2018, a cargo del INEGI.

la *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016*, refiere que el total de hogares asciende a 33,462,598, y el total de integrantes en el hogar a 122,643,890⁴.

“Hay sectores de la población que están más expuestos a sufrir exclusión social y económica, como los hogares de madres solteras con hijos, ancianos solos, ancianos con hijos discapacitados, inmigrantes. Habitualmente estas son subpoblaciones que se benefician de las políticas sociales-familiares, aunque la administración pública “vende” esas medidas como de política familiar” (Montoro, 2018). No obstante, la situación del riesgo de exclusión social o económica, no aplica para todos los casos, por ejemplo, quienes tienen seguridad social, lógicamente cuentan con un servicio básico de salubridad, o las familias de madres solteras, o separadas, que cuentan con pensión alimenticia para sus hijos menores de edad.

3.1.1. Población según su situación en el mercado laboral

Como se anotaba anteriormente, la población en México asciende a 119,938,473 personas, según la última encuesta intercensal (2015b). Las cifras del CONEVAL (2016) arrojan que, del total de la población, 53.4 millones viven en pobreza (43.6 %), y 9.4 millones viven en pobreza extrema (7.6 %).

La población ocupada en el sector informal (INEGI, 2018), que agrupa a todas las modalidades del empleo informal (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores no subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) sumó 30 millones de personas. El INEGI contabiliza además otra categoría de población ocupada en el sector informal, que se refiere a la ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables, que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, categoría que suma un total de 14.4 millones de personas. Por

⁴ Excluye a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes.

otro lado, la población subocupada⁵ llegó a 3.6 millones de personas y la población desocupada⁶ fue de 1.7 millones de personas. La tasa de informalidad laboral de la población de 15 años y más es de 56.8 %. Finalmente, la población económicamente activa (PEA)⁷ asciende a más de 54 millones y medio de personas y el 43.3% tiene una ocupación laboral formal (INEGI, 2017). La población subocupada está calculada respecto a la población ocupada, y la población desocupada respecto a la población económicamente activa. Ver tabla 1. Es significativa el elevado porcentaje de la población que queda fuera de la protección social, al trabajar de manera informal, hecho que impacta en numerosas familias que pueden resultar vulnerables, a menos que uno, de los integrantes labore en el sector formal. Es decir, si en una familia, trabaja el jefe en el sector formal, y la esposa en el sector informal, puede incluir en la seguridad social a su cónyuge e hijos, dado el caso, o viceversa. El problema se acentúa en los casos donde ninguno de los integrantes trabaja en el sector formal.

Tabla 1. Indicadores de ocupación y empleo durante el cuarto trimestre de 2017

Principales tasas	Porcentaje
Tasa de desocupación 1/	3.4
Tasa de subocupación 2/	6.9
Tasa de informalidad laboral 12/	56.8
Tasa de ocupación en el sector informal 12/	26.8

Nota: Las diferencias en puntos porcentuales resultan de considerar los indicadores con todos sus decimales.

1/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa

2/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada

⁵ Referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda. INEGI (2018).

⁶ Entendida como aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo una actividad por obtener empleo INEGI (2018).

⁷ Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que la buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. INEGI (2018).

Fuente: INEGI. (2017). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el cuarto trimestre de 2017. Comunicado de prensa Núm. 70/18. 13 de febrero de 2018.

La población no económicamente activa (PNEA)⁸, con base en los resultados de la Encuesta nacional de Ocupación y Empleo (2017), correspondía a 2017, 37.3 millones de personas, equivalente al 40.6% del total de la población de 15 años y más. De este sector, 31.7 millones manifestaron no estar disponibles para trabajar pues tenían que atender otras obligaciones, o tenían interés pero se encontraban en un contexto - impedimentos físicos, obligaciones familiares u otras condiciones- que les impedía poder hacerlo.

De acuerdo con las cifras disponibles, relacionadas con el sexo y la condición de actividad económica, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arroja que en el segundo trimestre de 2015, la población de 15 años y más asciende a 88.2 millones de personas. Y su distribución por sexo muestra que 41.9 millones son hombres, de los cuales ocho de cada 10 son económicamente activos, y 46.3 millones son mujeres, de las cuales cuatro de cada 10 son económicamente activas. Los datos revelan la paulatina contracción de la brecha entre los sexos en la tasa de participación económica.

Aunque, como se ha revisado en las últimas cifras de 2017, 56.8% de la población trabaja en el sector informal, situación que conlleva a varias familias a carecer de garantías enmarcadas en las políticas sociales públicas. El perfil de los trabajadores informales (INEGI, 2014), por tanto vulnerables, son quienes trabajan por cuenta propia, o micro empleadores, a los trabajadores subordinados remunerados (asalariados, por comisión y/u honorarios); los trabajadores familiares que participan en la actividad sin tener un acuerdo de remuneración monetaria. Los trabajadores remunerados y los familiares no remunerados, son vulnerables doblemente por carecer de garantías laborales que puedan hacer efectivas. Otras categorías de trabajadores en el sector

⁸ Agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. INEGI (2018).

informal son: autoempleados en agricultura campesina, servicio doméstico remunerado no protegido (normalmente realizado por mujeres), trabajadores asalariados no protegidos laborando por unidades económicas formales, trabajadores no protegidos sin remuneraciones fijas en unidades económicas formales.

Además, a nivel de antecedente por el año de referencia, es relevante puntualizar, que el principal preceptor de ingresos en México hasta el año 2014, era el jefe hombre, pero no el único (INEGI. 2015c). Ver tabla 2. Al mismo tiempo, a partir de los años 80 del siglo pasado, la participación de las mujeres en el sector productivo, creció aceleradamente, por varias causas económicas y sociales. Las devaluaciones afectaron el poder adquisitivo de los salarios; y, entre las causas sociales se encuentran los programas de planificación familiar, que contribuyeron a bajar considerablemente las tasas de fecundidad.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) refiere que en el tercer trimestre de 2016, 20.8 millones de mujeres de 15 y más años forman parte de la población económicamente activa (PEA) en el país... aunque el empleo en las mujeres ha crecido a un mayor ritmo que los hombres en las últimas dos décadas, la participación femenina sigue siendo menor a la masculina, 78 de cada 100 hombres de 15 años y más pertenece a la población económicamente activa. (En este mismo periodo). De las mujeres ocupadas, 23.3% trabajan por cuenta propia, 2.3% son empleadoras y 7.5% no recibe remuneración por su trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas son subordinadas y remuneradas, de ellas, 37.7% no cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral, 41.9% labora sin tener un contrato escrito, más de la tercera parte (33.8%) no cuenta con prestaciones laborales, solo una de cada dos trabajadoras subordinadas (55.2%) goza de vacaciones pagadas, 62.6% recibe aguinaldo y 16.9% reparto de utilidades. Y más de la tercera parte (37.1%) de las mujeres de 15 y más años ocupadas, cumple jornadas semanales de entre 40 y 48 horas; 19.2% cumple una jornada de más de 48 horas por semana. pp. 12-13. INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer, (6 de marzo de 2017). Aguascalientes. pp. 1-16.

Tabla 2. Hogares por sexo del jefe del hogar y el perceptor de ingresos y su distribución según tipo de perceptor 2014

Sexo del jefe y del perceptor	Total	Perceptor único	Perceptor principal
Jefe hombre	23,502,336	6,626,159	16,876,177
Jefe mujer	8,108,229	2,785,666	5,322,563

Nota: Excluye hogares donde no se especificó el sexo del perceptor de ingresos.

Fuente: INEGI. *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014. Base de datos*. En INEGI (2015c). *Mujeres y hombres en México 2015*. p. 117

Se observa que, para un número significativo de la población mexicana, las obligaciones familiares tienen prioridad con respecto a trabajar fuera de casa con un empleo económicamente remunerado. La situación podría deberse a una decisión propia y satisfactoria, o a una decisión no satisfactoria, en el caso por ejemplo de cuidar adultos mayores enfermos, carecer de prestaciones sociales como guardería, seguridad social, etc.

3.1.2. Hogares según situación económica

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2016 proporciona un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución, con una representatividad urbana y rural, el tamaño de la muestra es de 81,515 viviendas. Los temas a tratar en este apartado son: las características sociodemográficas y económicas de los hogares y sus integrantes (ver tabla 3), subdivididas en ingresos y gastos (ver tablas 4 y 5). Referente al primer tema, el total de hogares, según la ENIGH corresponde a 33,462,598. Y el total de integrantes en el hogar asciende a 122,643,890 personas. Para el segundo tema se desglosan datos referentes a la composición de las principales fuentes de ingresos

Tabla 3. Características sociodemográficas y económicas seleccionadas de los hogares y sus integrantes* (promedios)

Característica	ENIGH 2016 (promedios)	Característica	ENIGH 2016 (promedios)
Tamaño del hogar	3.67	Integrantes del hogar de 15 y más años económicamente activos	1.74
Edad del jefe o jefa	49.20	Integrantes del hogar de 15 y más años no económicamente activos	0.92
Integrantes del hogar menores de 15 años	1.00	Perceptores por hogar	2.45
Integrantes del hogar de 15 a 64 años	2.38	Integrantes del hogar ocupados	1.69
Integrantes del hogar de 65 y más años	0.29		

*Excluye a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

Resalta en la tabla que la mayoría de los integrantes de un hogar con un tamaño, en promedio de 3.67, e integrantes de 15 y más años, son económicamente activos casi el 50% de los integrantes. Al incluir la variable de edad del jefe o de la jefa, 49.20 años en promedio, los integrantes del hogar no económicamente activos es de 0.92. Los hogares con un jefe o jefa de familia de 49.20 años en promedio pueden –por el momento vital en el que está la persona- presentar situaciones de hijos estudiando el nivel medio o superior, cuidados de enfermos, o hijos desempleados, de acuerdo a los datos de la población no económicamente activa, que se muestran en el apartado correspondiente de este capítulo.

Sobre los ingresos, la ENIGH (2016) estima en los hogares un ingreso corriente total trimestral de 1.56 billones de pesos. El ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos en los hogares, alcanzando un 64% del ingreso total; las remuneraciones por trabajo subordinado son la principal fuente de ingresos en el país, representan el 54.6% del ingreso total y el 84% del ingreso del trabajo. Las principales fuentes de ingresos se distribuyen en: ingreso corriente, renta de la propiedad, transferencias, estimación del alquiler de la vivienda⁹, otros. Ver tabla 3.

Tabla 4. Ingreso corriente total trimestral. Composición de las principales fuentes de ingreso

Composición de las principales fuentes de ingreso	ENIGH 2016 (miles de pesos)	Distribución porcentual
Ingreso corriente	1,556,701,245	
Ingreso del trabajo	1,000,728,997	64.3%
Remuneraciones por trabajo subordinado	849,589,613	
Ingresos por trabajo independiente	112,895,147	
Ingresos de otros trabajos	38,244,238	
Renta de la propiedad	136,796,966	8.8%
Ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades	118,562,417	
Arrendamiento de activos tangibles y financieros	18,234,549	
Transferencias	242,235,486	15.6%
Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario	103,899,818	
Becas provenientes del gobierno y de instituciones	4,720,954	

⁹ La estimación del alquiler de la vivienda propia es tratada como parte de los ingresos provenientes de la producción de servicios en el hogar para consumo propio. Dichas estimaciones representan un monto de recursos que los hogares liberan del pago por servicios de alojamiento y que pueden destinar de manera regular al consumo de bienes y servicios, lo que finalmente repercute de manera continua y directa en los niveles de bienestar. En sentido inverso, los hogares que se encuentran en viviendas que no son propias y que pagan alquiler o renta, tienen que utilizar de manera regular parte de su ingreso corriente para cubrir este rubro, afectando la disponibilidad de ingresos para la satisfacción de otras necesidades. El valor estimado de este servicio sería el equivalente al alquiler que el hogar habría de pagar en el mercado laboral por contar con un alojamiento del mismo tamaño, calidad y ubicación. ENIGH (2016).

Composición de las principales fuentes de ingreso	ENIGH 2016 (miles de pesos)	Distribución porcentual
Donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares	32,697,318	
Ingresos provenientes de otros países	11,510,701	
Beneficios provenientes de programas gubernamentales	27,644,052	
Transferencias en especie de otros hogares	41,683,299	
Transferencias en especie de instituciones	20,079,345	
Estimación del alquiler de la vivienda	175,588,714	11.3%
Otros ingresos corrientes	1,351,082	0.1%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

El ingreso corriente promedio trimestral por hogar en 2016 resultó en 46,521 pesos, correspondiendo la mayor contribución al ingreso por trabajo (29,906 pesos), equivalente a un ingreso diario de 332.2 pesos por hogar. En segundo lugar, se encuentran las transferencias (7,239 pesos), que incluyen jubilaciones y otros beneficios. Y la estimación del alquiler de la vivienda (5,247 pesos), la renta de la propiedad (4,088 pesos) y otros ingresos corrientes (40 pesos). (ENIGH, 2016).

Llama la atención el ingreso por transferencias, de 15.6%, que puede deberse a que varios mexicanos han migrado a Estados Unidos de Norte América, principalmente, en busca de trabajo y de mejores ingresos, los datos del *Anuario de migración y remesas 2016*, señala que en 2005 había 36.9 millones de personas de origen mexicano en E.U.A., de las cuales 12.2 millones eran migrantes nacidos en México.

En la tabla 5 se observa el gasto corriente monetario total trimestral por grandes rubros de gasto.

Tabla 5. Gasto corriente monetario total trimestral por grandes rubros de gasto

Rubro de gasto	Total (miles de pesos)
Gasto corriente monetario	941,750,423
Alimentos, bebidas y tabaco	331,486,164
Vestido y calzado	43,582,573
Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles	89,351,019
Artículos y servicios para la limpieza, cuidados de la casa, enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos (ropa blanca)	55,577,430
Cuidados de salud	25,424,082
Transporte; adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos; comunicaciones	182,174,375
Servicios de educación, artículos educativos, artículos de esparcimiento y otros gastos de esparcimiento	116,939,886
Cuidados personales, accesorios y efectos personales y otros gastos diversos	69,656,409
Transferencias de gasto	27,558,486

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

En los hogares mexicanos se da prioridad a los gastos de alimentación, transporte adquisición, mantenimiento , accesorios y servicios para vehículos¹⁰. En la jerarquía, de gastos, siguen los servicios de educación y gastos de esparcimiento; vivienda (su alquiler o pago a plazos), energía eléctrica y combustibles.

¹⁰ Es común que las familias tengan por lo menos un vehículo por razón de la necesidad de transportarse al trabajo, y/o a la escuela debido a que normalmente las distancias son grandes, y el servicio de transporte público carece de calidad en horarios, mantenimiento de los autobuses, etc. En algunas ciudades del país, se utilizan autobuses que tienen más de 20 años circulando como medios de transporte público.

3.2. Familia y cohesión social

Es evidente que las tendencias en la nupcialidad, el divorcio y la fecundidad impactan en las relaciones familiares y comunitarias. A efecto de este trabajo, y para plasmar algunos vínculos entre las dinámicas familiares destacan los resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia ECOPRED, aplicada en 2014 (2015d). La ECOPRED fue implementada por el INEGI para atender la iniciativa de la Secretaría de Gobernación de crear un instrumento que respaldara cuantitativamente la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Su utilidad radica en identificar las influencias en la formación y socialización de los jóvenes mexicanos en zonas urbanas; sería de gran interés poder contar con un trabajo semejante para las zonas rurales del país. De forma específica se pretende identificar la relación y percepción de los jóvenes sobre sus contextos más cercanos: familia, amigos cercanos, vecinos, comunidad, escuela o trabajo. El objetivo general se centró en medir en los jóvenes de 12 a 29 años de edad factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia que incrementen la posibilidad de que esta población replique estos patrones en la sociedad.

La encuesta partió de las teorías de la prevención desde tres perspectivas y dimensiones de intervención: desarrollo (dimensiones de intervención individual y familiar), comunitaria (dimensiones de intervención social y comunitaria), y situacional (institucional). El tamaño de la muestra nacional fue de 97,754 viviendas, cubriendo 47 ciudades, distribuidas en las 32 entidades federativas; para efectos de este análisis se tomaron en cuenta las dimensiones familiares e individuales o personales, por estar directamente vinculados al ámbito familiar.

La ECOPRED estima que 64% de los jóvenes de 12 a 29 años que no son jefes de hogar, viven con ambos padres; 23% viven sólo con sus madres; 3% únicamente con sus padres; y 10% viven con uno o más parientes adultos (INEGI, 2015d). Entre las causas por las cuales 36% de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se presenta la

ausencia de al menos una figura parental, sobresale el hecho de que, del último porcentaje, están separados 40.5%, sigue el fallecimiento de al menos uno de los padres 15.1%. Las otras causas menos sobresalientes son: al menos uno de los padres abandonó el hogar 11.5%, por motivos laborales 10.7%, nunca se unieron 8.0%, otra situación 21.1%, al menos uno está en prisión 0.6%.

El tiempo de convivencia de los jóvenes con sus padres, de lunes a viernes, en hogares biparentales y monoparentales refleja una pequeña diferencia, 6,26 y 5,52 horas respectivamente. En los hogares biparentales, los jóvenes interactúan más con sus madres. Según la encuesta, la cohesión social se forja en los jóvenes mediante la convivencia, en uno de los primeros resultados se observa que el número de horas de convivencia de los jóvenes que viven en hogares biparentales y monoparentales es distinto, en las familias biparentales, los jóvenes conviven con sus familias más tiempo que los jóvenes de familias monoparentales. Aunque la diferencia de poco menos de una hora no parece ser importante, podría representar, a reserva de confirmarlo en un estudio posterior, que en las familias biparentales, aunque el padre y la madre trabajen, es probable que ambos se organicen para poder convivir con su hijo o hijos. Otra situación posible es que solo uno de los progenitores trabaje fuera del hogar, en consecuencia, sea factible convivir un poco más. En este caso, suele ser la madre quien trabaja en el hogar, y de acuerdo a la ECOPRED, los jóvenes que viven en hogares biparentales, conviven más con sus madres que con sus padres.

En los casos de las familias monoparentales, la causa de la diferencia en el menor tiempo de convivencia podría deberse a que el padre o la madre, deben trabajar, tal vez más tiempo para mantener a la familia. En ocasiones, en situaciones de divorcio, si los jóvenes son menores de edad, pueden recibir pensión alimenticia, si se ha llegado a un acuerdo, o sentencia de un juez de la instancia correspondiente. En cualquier caso, es común que la economía de la familia se vea afectada ante una separación o un divorcio, así como la convivencia de sus miembros.

Los jóvenes, tanto los que habitan en hogares biparentales como en monoparentales señalan que en su familia se divierten juntos, conocen a sus amigos, saben a dónde van cuando salen con amigos, van juntos de compras, les preocupa su desempeño escolar o laboral, les asignan tareas dentro del hogar, los aconsejan u orientan cuando tienen problemas, hablan sobre sus amigos, novias/novios, les advierten sobre los efectos de las drogas y el alcohol, los regañarían si los vieran drogados, ebrios o fumando, ven juntos la televisión y comentan sobre lo que ven, los regañan si los ignoran, les ponen una hora límite de llegada, los regañarían si sus calificaciones fueran bajas. (INEGI, 2015d, pp. 12-13).

Todas estas manifestaciones que se producen en la interacción entre los padres y sus hijos jóvenes, son normales y provocan un clima determinado en el hogar. Los padres, por el hecho de serlo, de manera natural tienden a convivir con sus hijos, protegerlos, enseñarles qué es adecuado o bueno para ellos, y qué situaciones supondrían un riesgo para su salud o su integridad. Estos aspectos, son los que marcan grandes diferencias entre el grupo familiar y otros grupos, de amigos, compañeros, etc., porque forman parte de la experiencia personal más importante, que conlleva la formación de valores y virtudes humanas, de modo que se vuelven referencia para establecer y construir en el día a día, otras relaciones personales, en los ámbitos no familiares, especialmente, como parte de la cultura y la tradición. Esta convivencia y lo que se genera en ella, marca estilos de vida, creencias, e interpretaciones de la misma, incluso para la creación de la propia familia, al ser el principal referente en este sentido, tal como lo muestran los datos de la ECOPRED. Incluso, las principales fuentes de satisfacción personal de estos jóvenes, son las relaciones con su familia, y entre los modelos de persona a seguir, destaca algún familiar, a quien admiran porque ha sabido seguir adelante.

La consistencia referente a la importancia que los jóvenes manifiestan por su familia se observa también en los porcentajes de tiempo dedicados a las acciones que llevan a cabo con sus padres. Independientemente del tipo de hogar, biparental o monoparental, las actividades a las que más tiempo invierten con las madres son: la inclusión en

actividades familiares 93.0, se divierten juntos 91.9, los regañarían si los vieran drogados 90.4, conocen a sus amigos 90.1. Nuevamente, se nota un contraste con el tiempo que los padres destinan a estas mismas actividades, algunas veces ligeramente por debajo, y en ciertas actividades el porcentaje por debajo con respecto a las madres, es más significativo. Los padres invierten con sus hijos jóvenes inclusión en actividades familiares 81.3, se divierten juntos 85.3, los regañarían si los vieran drogados 87.9, conocimiento de los amigos 68.4. La presencia de la madre es mayor, no únicamente en cuanto al tiempo de convivencia, sino en los cuidados y las enseñanzas a través de la diversión y los regaños. Los padres, igualmente, realizan estas tareas, pero en un tiempo menor. Por consiguiente, se puede sostener que la madre lleva la batuta en la educación y cuidado de los hijos en el hogar, desde la infancia hasta la juventud, por su presencia y convivencia más frecuente con sus hijos, que sus padres, quienes al parecer, destinan más tiempo al trabajo, de acuerdo a las cifras de la ENIGH, el perceptor principal de ingresos al hogar es el padre.

Por otro lado, la herramienta empleada para no pelear es la evasión mutua¹¹ que se utiliza en el 44.2% de los hogares. Los conflictos al interior de los hogares se dan principalmente entre hermanos (61.6%) y entre hijos y sus mamás (23.2%). Las principales causas de conflictos entre los miembros del hogar son: no cumplir con las tareas del hogar (35.3%) y la convivencia entre hermanos (32%). Cuando hay conflictos entre miembros del hogar, los jóvenes se limitan a hacer lo que les dicen (42.8%), o ignoran la situación (36.3%); ante el mal comportamiento de los jóvenes, sus padres hablan con ellos y los persuaden de sus errores o malos comportamientos (66.7%), y son regañados (38.6%).

En cuanto a la dimensión personal, se destacan las fuentes satisfacción personal, los modelos de persona a seguir. Los jóvenes se consideran satisfechos con su salud (94.7%), las oportunidades para ser feliz (93.7%), la relación con su familia (93.6%), la

¹¹ La evasión mutua se refiere a no coincidir, o desentenderse de la persona del hogar con la que tienen en conflicto y ambas partes procuran, por ejemplo, no hablar, hasta que se encuentren más tranquilos.

relación con sus padres (93.5%), sus bienes materiales (92.7%), la casa donde vive (92.1%), su desempeño escolar o laboral (91.4%), su escuela o lugar de trabajo (91.3%), su aspecto físico (88.0%), sus profesores o jefes (87.0%), el dinero (78.6%), su colonia o barrio (77.3%). De los modelos de persona a seguir, los jóvenes sienten admiración por un familiar, amigo, novio o pareja (72.3%), por una figura pública (artista, deportista, activista social, personaje de la vida intelectual, líder de

Tabla 6. Modelos de persona a seguir

Razones por las cuales los jóvenes de 12 a 19 años admiran a una persona o figura	
Han sabido seguir adelante	61.0
Por su valentía, su forma de ser o de pensar	21.5
Por su talento, conocimientos o capacidad intelectual	19.7
Por su disciplina y/o habilidades	9.5
Por su imagen mediática	8.1
Por sus bienes, afecto o tiempo que le da	8.0

Fuente: INEGI (2015b). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014.

opinión, político o gobernante, 19.3%), alguien de la escuela o del trabajo (13.6%). Entre las razones por las cuales sienten admiración por esas personas sobresale el hecho de salir adelante. (Ver tabla 6).

Son muy significativos los resultados respecto a las fuentes de satisfacción de los jóvenes, destaca la relación de la familia con 93.6%, y la relación con sus padres 93.5%. Si a esto añadimos la importancia que para los jóvenes tiene un modelo de persona a quien admiran, en el caso de los jóvenes encuestados a sus familiares, algún amigo, novio o pareja (72.3%) y, que digan que la razón principal de la admiración es porque ha sabido seguir adelante, se demuestra que los ejemplos de vida de las personas más cercanas en el entorno son determinantes en los jóvenes como marcos de referencia en

la vida, y la familia sigue siendo el referente principal. Se suma, entonces, otra razón de peso en la actualidad para favorecer la integración familiar desde las esferas de lo público y lo privado a fin de prevenir la violencia y la delincuencia que tanto aquejan en varias zonas del país. Entonces, el entorno próximo de los jóvenes, que es su familia, implica para ellos una connotación muy positiva, puesto que esta es fuente fundamental de satisfacción personal, seguridad, alegría, bienestar en general.

Por otro lado, así como es evidente que existen familias con unas relaciones de enriquecimiento personal y de una auténtica formación en valores y virtudes humanas que se forjan en la convivencia cotidiana, es cierto que algunas familias padecen dificultades, por diferentes causas, ya sea desde su fundación matrimonial, desde el noviazgo de los que son ahora esposos y padres, por situaciones que se han presentado en la pareja, etc., porque es verdad que no existe una preparación específica para ser esposos. No obstante, estas familias con conflictos deben ser atendidas, en primera instancia por los propios integrantes y, en varias ocasiones necesitar ayuda urgente, especializada, y evidentemente, también requieren una atención desde las políticas sociales y familiares.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016, INEGI, 2017), generó información sobre las experiencias de violencia que enfrentaron mujeres de 15 años y más, a partir de una muestra nacional de 142,363 viviendas, y una mujer por vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales, de las 32 entidades federativas. Y se obtuvo una tasa de respuesta de 85.7%. La información fue organizada por tipo de violencia -emocional-psicológica, física, sexual, económica o patrimonial- y ámbito de la relación -de pareja, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y en la familia-.

Los principales resultados mostraron que el 66.1% de las mujeres encuestadas ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito de su vida. En la familia, el

tipo de violencia más frecuente es la emocional, con un 8.1%. Las personas señaladas más frecuentemente como agresoras son los hermanos, el padre y la madre; los principales agresores sexuales, los tíos y los primos. La gran mayoría de las mujeres no piden apoyo ni denuncian la violencia padecida en cualquiera de los ámbitos. Entre las razones que las mujeres exponen para no denunciar aparecen: minimizar el hecho, un 43% alude que se trató de algo sin importancia que no le afectó; miedo, un 11.0% sentía miedo a las consecuencias o amenazas de una eventual denuncia; vergüenza, un 9.8%; no sabía cómo o dónde denunciar, un 9.8%; y pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa, un 9.7%. Además, declararon que sufrieron algún tipo de abuso sexual en la infancia un 84.6% de las entrevistadas.

En contraste con la integración familiar, se observa que principalmente en las familias, las mujeres sufren algún tipo de violencia, como se anotó, emocional-psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. Esta realidad, se desarrolla en medio de múltiples aspectos de urgente atención, debido a variadas circunstancias, que pudieron haberse gestado antes de la fundación de la familia y, o durante su conformación. La pareja, que posteriormente se convierte en padres, integra en sus vivencias un conjunto de conocimientos, experiencias pasadas, sentimientos, actitudes, emociones, etcétera, que forman parte de su historia de vida y de su personalidad. No en pocas veces, resulta complicado, ante una nueva experiencia percibir y elegir los medios por los cuales es mejor comunicarse y no se sabe cómo hacerlo. Es decir, el cúmulo de contenidos, significados que se le atribuyen a las relaciones de pareja y familia, y los hábitos que se crean, dependiendo de los recursos con los que se cuente para establecerla pueden ayudar o perjudicar a las relaciones familiares. Es posible que si el referente que se tiene en la familia de origen, consista en una relación de violencia, en ciertos casos se repita el patrón, debido a que es el recurso o marco de referencia con el que se cuenta. Claramente, no sucede en todos los casos porque hay familias conformadas e integradas sin violencia, que pudieron haber vivido violencia en su familia de origen y evitarán repetir este patrón que les resulta doloroso. El asunto que resalto, por el tema de este trabajo, es la necesidad urgente de tomar medidas preventivas, formativas y correctivas

en las familias más vulnerables, de forma prioritaria en las familias que sufren violencia, u otro tipo de problema impostergable de atender. Además, es evidente la urgencia de una auténtica educación sexual, basada en el respeto a uno mismo, a los demás, desde una cultura de los valores humanos universales y no desde ideologías de grupos. Y desde el ámbito privado y público quedan mucho camino por recorrer también en esta realidad que se proyecta en nuestra sociedad.

3.3. Usos del tiempo

La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014 (INEGI E INMUJERES, 2015e), realizada a mujeres y hombres de 12 años y más, de áreas rurales, urbanas e indígenas, revela que de cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de cinco horas (55.4%) contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno, un 41.9.8% del tiempo se dedica al trabajo para el mercado y un 2.7% en la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. En la población hablante de lengua indígena, el 58.6% del tiempo total se destina al trabajo no remunerado en los hogares, un 32.8% en el trabajo para el mercado y un 8.7% en la producción de bienes exclusivo del hogar. El tiempo dedicado trabajo de cuidados por sexo se muestra en la tabla 2.

Cabe mencionar acerca de la perspectiva vigente sobre el trabajo, sólo se considera a la producción de bienes y servicios para el mercado como la única actividad que tiene valor social para estimar el ingreso nacional de los países y deja de lado las actividades que se efectúan en el hogar para la satisfacción de necesidades básicas de sus miembros e indispensables para la reproducción de la vida diaria, las cuales son realizadas a gran escala por las mujeres. Estas actividades no son reconocidas como trabajo, ya que no se remuneran y no son consideradas significativas para la economía de los países. Aunque algunos estudios han señalado la importancia de que los hogares no únicamente sean considerados consumidores de bienes y servicios, sino también productores de los mismos, ya que en su interior son incontables las actividades productivas no pagadas y que generan bienestar a sus miembros, y a la sociedad. Algunos ejemplos de trabajos no

pagados que producen importantes bienes y servicios son el cuidado de niños, ancianos, discapacitados, su transportación, el trabajo para el autoconsumo en áreas rurales, los cuales forman parte de la producción nacional y no están incluidos en la medición tradicional de la economía (Minser y Becker en Fleming y Spellerberg, A., 1999). Si se considera que la economía en su acepción esencial que ofrece la Real Academia de la Lengua Española, es el “conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o individuo”, definitivamente, las perspectivas tradicionales sobre el estudio de la economía dejan fuera el trabajo fundamental elaborado al interior de las familias que de modo radical contribuye a la economía de los países, pues como se ha visto en este estudio, el bienestar se mide por cubrir necesidades materiales y no materiales, éstas las cubre especialmente la familia. Es por eso que la ENUT, integra y reconoce el trabajo de los cuidados de los integrantes del hogar como trabajo que contribuye a la economía del país sin que medie pago alguno.

Tabla 7. Horas semanales (promedio) que dedican hombres y mujeres (12 y más años) al trabajo de cuidado no remunerado de integrantes del hogar

Trabajo de cuidados	Hombres, horas/semana	Mujeres, horas/semana
Trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar global	12.4	28.8
Cuidado a integrantes del hogar de 60 y más años	14.9	17.7
Cuidado a integrantes del hogar de 15 a 59 años	2.1	2.3
Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 14 años	11.5	24.9
Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 5 años	5.2	13.0
Cuidados especiales a integrantes del hogar con enfermedad crónica, temporal o discapacidad	14.8	26.8

Fuente: INEGI e INMUJERES. (2015e). La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014. pp. 1-2.

Tabla 8. Trabajo doméstico no remunerado. Horas semanales (promedio) que dedican hombres y mujeres (12 y más años)

Trabajo doméstico no remunerado	Hombres, horas/semana	Mujeres, horas/semana
Trabajo doméstico no remunerado global	9.7	29.8
Preparación y servicio de alimentos	4.0	13.7
Limpieza de la vivienda	4.1	9.6
Limpieza y cuidado de ropa y calzado	1.7	5.0
Compras	2.3	2.8
Mantenimiento de la vivienda	1.9	1.1
Pagos y trámites	1.1	1.2
Gestión y administración	1.1	1.2

Fuente: Fuente: INEGI e INMUJERES.. (2015e). La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014. pp. 1-2.

Respecto a las actividades domésticas, las mujeres dedican en promedio 29.8 horas a la semana, y los hombres 9.7 horas a la semana. Las mayores diferencias se observan en la preparación y servicio de alimentos, limpieza de la vivienda, ropa y calzado.

Hay tareas pendientes en el reparto equitativo de las actividades domésticas entre los hombres y las mujeres, no obstante, los factores culturales, de las propias circunstancias, e incluso de acuerdos y decisiones personales familiares son atribuibles a estas diferencias en las horas dedicadas a las actividades domésticas de los hombres y de las mujeres en México. La misma creatividad en la organización de las tareas puede estar implícita en este reparto del trabajo al interior del hogar, de acuerdo con Gobernado Arribas (2003), los elementos que acompañan a la organización familiar “constituyen recursos adaptativos propios de las familias para conseguir sus objetivos. El tamaño, la división social dentro y fuera del hogar, la jerarquía interna de la

familia... son elementos que las propias familias modifican para conseguir sus objetivos” (p. 135). De modo que, cuando se dan condiciones de ayuda de la familia para colaborar, es común que los enfermos y, los niños pequeños reciban cuidados de su madre y los adultos mayores enfermos reciban atención frecuentemente de sus hijas, mientras que los hombres suelen ser más protagonistas en el papel de proveedores económicos y de apoyo emocional.

En el capítulo cuatro se analizan los principios de la política social en México, y la manera en que la agenda pública contempla la protección familiar que es apremiante para lograr el desarrollo armónico de las personas, desde los ámbitos de la familia y la sociedad, puesto que es contundente la repercusión de la institución familiar en el bienestar integral de los seres humanos que nos encontramos inmersos en un Estado, las relaciones familiares reflejan mucho el tipo de relaciones en el trabajo, en el mercado y en cualquier otro ámbito vital, al ser la familia, el primer ámbito educativo y de aprendizaje de virtudes sociales.

4. Políticas sociales y familia

4.1. Familia y funciones de la familia

Nanclares Valle (2018) sostiene que hablar de familia se torna complejo si se tiene en cuenta que no se trata de una figura de creación doctrinal o legal, sino que es una realidad existente en todo momento. Se suelen adoptar dos posturas, la primera es hablar de familia de manera coloquial “y considerar a la familia a aquel grupo humano fundado no tanto (o no sólo) en el parentesco y el vínculo conyugal, sino más bien sobre el dato de la convivencia y sobre lazos de solidaridad y de mutua ayuda” (s.p.). No obstante, el hijo extramatrimonial de un hombre casado que no convive con su padre sino con su madre, constituirían realmente una familia monoparental, aunque no vivan bajo el mismo techo. El segundo enfoque es jurídico, e implica definir a la familia en el ordenamiento legal vigente. Las funciones de la familia, que Nanclares emplea para definir a la familia desde el punto de vista jurídico, son funciones que la familia desempeña históricamente, es decir, las funciones políticas, económicas y socioculturales que la familia ha desempeñado desde que la familia es familia, implican una magnitud trascendental, no solo al entorno próximo de los familiares, la sociedad en todos sus ámbitos se ve influenciada por las funciones de la familia, por tanto se ha protegido la institución familiar por el derecho, al interior y al exterior de la misma. por eso, existen derechos para contraer matrimonio, y ante la sociedad es una figura jurídica reconocida de derechos y obligaciones.

El elemento histórico cobra entonces especial relevancia pues con el paso de los siglos se puede apreciar una evolución en lo que se entiende por familia... al margen del vínculo conyugal... Por el contrario, se refuerza la protección y la trascendencia del otro pilar esencial, la filiación... El matrimonio sigue siendo fuente de vínculos de tipo familiar. Junto a la función de reproducción y conservación de la especie, característica, pero no distintiva, podemos señalar las siguientes funciones:

- función de tipo político: propia del Derecho romano, que consideraba la familia como una sociedad de familias.

- función de tipo económico: la familia ha sido una unidad de producción, en la medida en que cuantos más sean los miembros de la misma, mayor será la fuerza de trabajo y... la productividad en beneficio del grupo familiar o de un tercero.
- función de tipo sociocultural: la familia es el instrumento básico de socialización del individuo, el lugar donde este debe adquirir los modelos de comportamiento, los valores morales y los hábitos que le permitan vivir en una sociedad. Es el hábitat idóneo para el individuo, donde se deben sentar las bases para el pleno desarrollo de la personalidad del sujeto. Esta es la función que actualmente prevalece y la que lleva a promover la defensa de la familia en tanto cuanto defensa de la sociedad misma. (Nanclares, 2018).

De lo anterior se deriva la importancia del diseño e implementación de una política familiar, entendida como: las intervenciones de los poderes públicos, o de la administración pública a fin de “facilitar recursos (en sentido amplio) a personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar las mismas en las mejores condiciones” (Montoro y Barrios, 2008, p. 35; Flaquer, 2000).

En la teoría de la formulación de políticas sociales, así como en su práctica, la organización familiar y los modelos de familia tienen o deberían tener un papel central en las políticas estatales de bienestar de los países, dado el papel fundamental que la familia tiene en las prácticas o funciones en las que se activan las políticas sociales, la organización familiar debería ser uno de los ejes principales de los diagnósticos sociales y de la implementación de políticas en este sentido. Lo revisado en los apartados anteriores muestra que las políticas han privilegiado el protagonismo en materia de bienestar al Estado, y/o al mercado; sin embargo y paradójicamente, sostiene Esping-Andersen (2002, en Arriagada, 2007) que las fallas de estos pilares del bienestar son asumidos por la familia, que compensa los fracasos de las políticas estatales y las desigualdades provocadas por el mercado.

Los rezagos en materia de política familiar apuntan a varios aspectos sobresalientes en el plano de las transformaciones que ha sufrido la institución familiar en las últimas décadas y que no han sido incorporadas en las políticas públicas, y se pueden resumir en las funciones que históricamente ha realizado la familia y los cambios en su dinámica,

estructura, problemáticas como la violencia familiar, las separaciones o divorcios, las familias reconstituidas, la educación sexual, el embarazo en adolescentes, los cuidados de los enfermos y de los adultos mayores, entre otros. En el terreno de esta relación entre el Estado, la institución familiar, sus funciones, y dinámicas Jelin (2005, pp. 95-96, citado en Arriagada, 2007) asevera que la familia

es una institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad. Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos... En el paradigma occidental moderno, la expectativa social es que los vínculos familiares estén basados en el afecto y el cuidado mutuo, aunque también incorporan consideraciones instrumentales, estratégicas y basadas en intereses, tanto en el corto plazo de la vida cotidiana como en una perspectiva intergeneracional a más largo plazo. Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los patrones matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad... Los hogares y las organizaciones familiares están ligados al mercado de trabajo y a la organización de redes sociales, por lo que tendencias tales como las tasas de fecundidad y de divorcio, o procesos de envejecimiento, son parte de los procesos sociales y culturales...Están también sujetos a políticas públicas. Como institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales y a procesos políticos.

A esta realidad institucional familiar se requiere considerar en las políticas actuales, y considerar su dinámicas actuales como las tendencias de nupcialidad, conyugalidad, fecundidad, divorcio, violencia intrafamiliar, el reparto no equitativo de las actividades domésticas, pues se sigue enfocando, y de forma contradictoria, al protagonismo de las mujeres en la familia. Por un lado existe literatura abundante de este papel central de las mujeres en las actividades propias del ámbito doméstico, el problema de la conciliación entre el trabajo y los cuidados de los integrantes de la familia, y poco se ha tratado el aporte indispensable de los hombres en la familia actual.

4.2. Política familiar: concepto, principios y bases

La política familiar se entiende como los programas y medidas de intervención pública y los principios y directrices que los inspiran (Flaquer, 2000). En otras palabras, los requisitos ideales de una política familiar consistirían en conseguir crear un marco legal y un entorno social favorable para que las familias puedan cumplir todas las funciones sociales, culturales, políticas, enmarcadas en este capítulo.

Una política familiar debe estar inspirada en los principios de la libertad de elección y en la racionalidad y el realismo en el reconocimiento de las familias y de otras formas de convivencia. Debe tener un diseño integral e integrador. Las medidas sectoriales (en sanidad, vivienda, educación, fiscalidad...etc.) deberían estar coordinadas entre sí y perseguir los mismos objetivos... debe contemplar de forma global y armónica todos los campos socioeconómicos y jurídico-políticos donde la familia se manifiesta como factor estratégico primario... debe incorporar medidas que incentiven la responsabilidad activa de todos los agentes y fuerzas sociales (medios de comunicación social, sindicatos... asociaciones varias...) y la colaboración y conexión entre ellos y el gobierno. (Montoro y Barrios, 2008, pp. 36-37).

La política familiar requiere unos principios de diseño y acción, de acuerdo con Montoro y Barrios (2008), los principios específicos son: la universalidad, las medidas de política familiar deben abarcar a todas las familias, no solo a las conflictivas o en situaciones marginales; la participación, entendida la familia como un sujeto activo de la sociedad, no solamente receptor de beneficios; la subsidiaridad; la responsabilidad pública; la integración de recursos; la coordinación e integración interadministrativa; la descentralización; y la continuidad y estabilidad.

Las funciones de la familia que requieren una protección mediante una política familiar, también se traducen en ámbitos de servicios de bienestar en los que la contribución familiar se hace más sobresaliente. Un ejemplo de definición de estos ámbitos se encuentra en el Plan de Apoyo a la Familia del Gobierno de Navarra (2002), y se enmarcan a continuación:

1. La familia ante el desempleo. El principal mecanismo de ayuda de la familia a los desempleados, según Pérez-Díaz et al (1998), la convivencia -piénsese en los jóvenes sin empleo que conviven con sus padres.
2. La familia ante los problemas de los adultos mayores, sobre todo cuando de la afectación de su salud se trata, los cuidados normalmente se orquestan o se brindan desde la familia. A su vez, cuando su salud se los permite, los adultos mayores fungen como cuidadores de sus nietos o apoyan a las familias más jóvenes, al menos durante algunas temporadas.
3. La familia ante la educación: la familia es el marco en el que los niños y niñas comienzan a desarrollarse, no sólo como individuos sino como miembros de una comunidad, en tal sentido la familia satisface las necesidades básicas y comienza a socializar a las nuevas generaciones (creación de hábitos, actitudes y reglas de comportamiento social, formación y transmisión de valores y representaciones o pensamientos sociales, etc.).
4. La desigual contribución de los géneros: las actividades de bienestar anteriores, que son los elementos principales de la contribución de las familias a la calidad de vida de los miembros de la comunidad, no recaen en nuestro contexto de modo uniforme entre los miembros de las familias... la mayoría de las mujeres efectúan la gran mayoría de las tareas que se han considerado (p. 23).

Otros ámbitos que deben atenderse, con base en el análisis de las situaciones que enfrenta la familia mexicana en la actualidad, son:

- la familia ante la enfermedad,
- la familia ante la separación de los cónyuges,
- la familia ante las capacidades diferentes,
- la familia ante la inmigración o emigración y la separación forzada de sus miembros,
- la familia ante la violencia intrafamiliar,
- la familia ante el empleo informal,
- la familia indígena,
- la familia ante las condiciones de pobreza y de pobreza extrema.

Como preámbulo del tratamiento de la institución familiar en el país mexicano, es importante saber qué se entiende por política familiar en América Latina desde diversas visiones. La primera define las políticas de familia como “el conjunto de medidas o instrumentos que intentan intervenir en el modelo de familia existente, tratando de ‘conformar’ estructuras familiares para lograr un cierto modelo ideal de familia. Este ideal correspondería tanto a los valores culturales dominantes como a una concepción

de desarrollo económico y el papel que se le atribuye a la población en este modelo (Goldani, 2005 citado en Arriagada, 2007, p. 73).

La segunda visión define las políticas referidas a la familia como “el conjunto de medidas e instrumentos de políticas públicas cuyo objetivo es fortalecer las funciones que cumplen las familias”, destacando “la reproducción y socialización de sus miembros, filiación y herencia, garantías de las condiciones materiales de vida, construcción de la subjetividad de sus integrantes (sistemas de valores, actitudes, ideologías y personalidades)” (Goldani, 2005, en Arriagada, 2007, p. 73). Este tipo de política forma parte de las políticas públicas que engloban políticas universales de educación, salud, localizadas en el combate a la pobreza, la violencia doméstica, y otras (Goldani, 2005, citado en Arriagada 2007, p. 73).

Arriagada, por su parte, define y ordena las políticas públicas mediante el eje de las funciones de la familia y sostiene: “Se entiende por políticas hacia las familias las acciones referidas a: i) los aspectos legales que regulan la familia. ii) sus formas de constitución, desarrollo y disolución. (iii) sus relaciones internas. iv) sus relaciones externas en cuanto grupo y los distintos aspectos que inciden en su bienestar, como ingreso, vivienda, servicios de infraestructura, acceso a servicios de salud, educación y seguridad social...” (Arriagada, 2007, p. 73).

La tercera visión es introducida por Montaña, quien propone políticas hacia las familias que incluyan la perspectiva de género, en el sentido de normas, procedimientos, programas y mecanismos públicos y privados iguales para hombres y mujeres. Refiere tanto a las políticas sociales en campos tradicionales como educación, salud, previsión social..., como a las políticas recientes contra la violencia y, a favor de los derechos reproductivos. Asimismo, añade las políticas de familia dirigidas a conciliar el trabajo y el trabajo no remunerado de mujeres y hombres (Montaña, 2005, citado en Arriagada, 2007, p. 73).

Sostiene Arriagada (2007, p. 74) que en el debate se muestran diferentes concepciones de política familiar, sin consenso y delimitación, en consecuencia, la actual política familiar en América Latina se encuentra en transición. Es por ello que Arriagada propone diez puntos para mejorar la institucionalidad pública y las políticas hacia las familias. Propone efectuar diagnósticos de las nuevas realidades de las familias en Latinoamérica, desarrollar nuevas políticas y programas hacia las familias desde un enfoque de derechos, aplicar los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia en las políticas familiares, dotar de una institucionalidad efectiva para la coordinación de las políticas y los programas orientados a las familias, diseñar políticas de atención para el cuidado de las personas y de conciliación entre familia y trabajo, articular las políticas sectoriales y transversales orientadas a las familias, aumentar los recursos económicos destinados a estas políticas, descentralizarlas de su funcionamiento y evaluar las políticas y programas del rubro familiar para mejorarlas con base en la experiencia. (Arriagada, 2007, pp. 79-89).

Son varios los ámbitos y los retos para la política familiar en los países, aunado a la urgencia de evitar el desfase de los requerimientos actuales de las familias y sus dinámicas. En el apartado posterior, se analiza si en México existen realmente políticas familiares que atiendan a las funciones de la familia, con base en los principios y ámbitos señalados en presente apartado.

4.3. El marco legal y político de la familia en México

Los principios o lineamientos sobre la política y la familia en México se conciben en primera instancia o nivel en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 -2018, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Ley Federal del Trabajo judicial, fundamentalmente.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace mención en varias ocasiones a la familia, hecho significativo al tratarse de la Carta Magna del país. Se enuncian a continuación algunos fragmentos de cómo se concibe a la familia en el documento rector más importante del país mexicano.

Artículo 3º, fracción II, inciso c: “El Estado contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos...” (p. 5).

En la fracción III del mismo artículo, se afirma: “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto... el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale”. (p.5).

Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia... Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. (p. 8).

Artículo 29. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia... (p. 40).

Artículo 107, fracción III, inciso a, en caso de reclamarse actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el requisito de amparo “no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia... (p. 99).

Artículo 123, fracción VI. “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. P. 128. Fracción XXV “El servicio de colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación de este servicio... tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos a su familia”. Fracción XXIX. “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Apartado B, inciso d “Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley” (pp. 133, 137).

En cuanto a los derechos de la familia en México, tienen su fundamento en la citada Constitución, los tratados internacionales y las leyes internas. Asimismo, los códigos

civiles del Estado Federal y de los estados de la Federación regulan la capacidad legal de las personas, el estado civil, su domicilio y codifican el Derecho de Familia, integrado por las instituciones siguientes: matrimonio, concubinato, divorcio, obligaciones alimentarias, parentesco, filiación, patria potestad, tutela, adopción, patrimonio de familia. Los derechos de los niños están garantizados en el artículo 4 de la Constitución donde se establece que todos los niños tienen el derecho a la alimentación, salud, educación y recreación necesarias para su desarrollo integral.

Sobre el pilar de la Constitución mexicana se crearon códigos, leyes y regulaciones fundamentales entre los que sobresalen para los asuntos familiares: el Código Civil Federal de Procedimientos Civiles, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley del Instituto Mexicano de las Mujeres, la Ley Federal del Trabajo, la Regulación de la declaración y el reconocimiento de la paternidad, la Regulación de la adopción de menores, la Regulación de la tenencia, los derechos de visita, la sustracción y la restitución de menores, la Regulación de las obligaciones alimentarias a favor de menores y otros miembros de la familia, la Regulación de la protección contra el tráfico, la trata y otras formas de abuso sobre las mujeres, incluyendo el abuso sexual.

La concepción jurídica de la familia en México refiere que la protección constitucional de la familia no se limita a un tipo específico de familia, como podría ser la nuclear, conformada por padre, madre e hijos. La familia se protege como realidad social a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente y dando cobertura a las familias que se constituyan con el matrimonio, con uniones de hecho, con un padre o una madre e hijos; o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011).

En México, dentro del derecho, la familia se concibe como se señala en los párrafos posteriores, además se reconoce que por tratarse de una institución que genera derechos y obligaciones, se estudie desde diversas ópticas científicas:

La familia constituye el grupo natural del cual surgen los individuos que conforman la sociedad. La familia es un grupo social en el que recae todo tipo de responsabilidades para que una sociedad se defina y desarrolle. Entre ellas se hallan las que se refieren directamente, en lo individual, a cada uno de los sujetos unidos por vínculos de sangre producto de la convivencia intersexual y de la filiación o por vínculos jurídicos, como ocurre con la unidad familiar en su totalidad.

Los grupos familiares han existido en todas las culturas a lo largo de la historia del hombre, y dieron origen a diversos tipos de familias, las cuales reflejan una gran variedad de situaciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, etc. Debido a ello, la familia es una institución que ha sido definida de muy distintas formas... se le ha considerado como primera asociación humana, o como la célula natural y necesaria de la sociedad; también como el núcleo de toda organización social o el medio en el que el individuo logra su desarrollo físico, psíquico y social ... se ha dicho de ella que es la unidad económica que conforma la base de la seguridad material del individuo en sus primeras etapas de desarrollo, al principio en el seno de la familia en que nace y , posteriormente, en el de la familia que hace; asimismo, se le ha señalado como la institución cuyos miembros se relacionan por derechos, deberes y obligaciones recíprocos. (Baquero Rojas y Buenrostro Báez, 2009, s.p.).

La familia, por su conformación biológica, social, política, económica, educativa, se estudia mediante distintas acepciones y ángulos, es por ello que las ciencias desde las cuales se conceptualiza a la familia para su estudio e incorporación al derecho familiar son principalmente, la biología, la sociología y el mismo derecho. El derecho de familia pertenece al derecho privado, a su vez, se vincula con el derecho público para reglamentar las relaciones entre sus miembros, su constitución, organización y disolución. En contraste con la relevancia y frecuencia del tratamiento de la familia en la Carta Magna y en el derecho familiar mexicano, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, sólo en dos ocasiones se menciona a las familias mexicanas. A continuación, se cita textualmente el tratamiento del documento rector a nivel nacional y los contextos en que se señala, mostrando cómo se concibe esta institución radical en la vida de todos los seres humanos.

El presente Plan Nacional de Desarrollo se elaboró bajo el liderazgo del Presidente de la República... observando en todo momento el cumplimiento del marco legal. La Constitución así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional,... y para que medie el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de *las familias mexicanas* (la cursiva es mía)...

El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal...

Por su parte, en el periodo 1982-1994 se llevó a cabo un complicado proceso de modernización de la economía mexicana en un contexto económico adverso. La crisis de la deuda a principio de los años ochenta llevó a una caída del PIB per cápita, en los salarios reales y en la productividad... este periodo culminó con una crisis que afectó el bienestar, patrimonio y poder adquisitivo de *las familias mexicanas* (la cursiva es mía)... El Plan Nacional de Desarrollo parte del reconocimiento de un hecho inobjetable: el crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos y para reducir en forma sostenida los niveles de pobreza. (Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, pp. 13-15).

Posteriormente, en el PND, se encuentra un apartado que alude a la prioridad del desarrollo social para un México incluyente, del alto porcentaje de mexicanos en condición de pobreza (42%) y de pobreza extrema (10.4%). Asimismo, se califica de inaceptables las situaciones de pobreza por tratarse de una injusticia social y una barrera para el crecimiento económico del país, así también el hecho del mantenimiento de un amplio sector de la población que está al margen de la economía formal. Igualmente se señala, en el apartado de Capital humano para un México con Calidad, la necesidad de fortalecer el Sistema Educativo Mexicano y vincular eficientemente el sector educativo, empresarial y social. El documento oficial termina con una estrategia para lograr que México alcance su máximo potencial, sobre cinco metas: México en paz, México incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero, México con Responsabilidad Global. Las estrategias transversales son: democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y, perspectiva de género. En las estrategias no se menciona a la familia, evidentemente, las prioridades son otras. Desde este marco nacional, la cascada del tratamiento de la familia es casi nulo en la política y los programas sociales.

Respecto a la Ley Federal del Trabajo promulgada por Decreto Presidencial en 1970, y que incorpora la última reforma en 2018, prevé estipulaciones puntuales de influencia directa a la familia que aplican contando con un trabajo formal; la población que trabaja en la economía informal no tiene acceso a estas prestaciones.. Las licencias son:

- De maternidad. Derecho que tienen las mujeres trabajadoras antes y después del parto para no asistir a las labores, con el objeto de proteger la maternidad y el cuidado del niño. La trabajadora embarazada disfrutará de un descanso de seis semanas anteriores y posteriores al parto. En total, la trabajadora embarazada tiene derecho a doce semanas. Si se adelanta el parto, puede transferir las doce semanas al periodo de posparto.¹²
- De adopción. Derecho que tienen las mujeres trabajadoras en caso de adopción para no asistir a sus labores, con el objeto del cuidado del infante. Consiste en un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día que reciba al infante.
- Por periodo de lactancia. Las madres trabajadoras tienen derecho a reposo para alimentar a sus hijos después del nacimiento. Pueden darse dos reposos por día, de media hora cada uno, cuando no sea posible, previo acuerdo con el patrón reducirán una hora de trabajo, en sustitución de los periodos de reposo.
- De paternidad y adopción. Descanso de cinco días que tienen los hombres para no asistir al desempeño de sus labores a partir del nacimiento o adopción de un hijo.

Cabe mencionar que la última licencia de paternidad se incorporó recientemente a la Ley Federal del Trabajo. Antes de 2017, únicamente las mujeres tenían licencia para el cuidado del hijo recién nacido. Esta medida ha sido tardía, si se considera que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones en su función de procreación, lo cual es otro reflejo de la deficiente protección de la familia desde las políticas sociales en general. El discurso del reparto equilibrado de las responsabilidades familiares entre los padres sigue sin tener frutos sustantivos, pues el problema no se resuelve con cinco días de permiso para que los hombres puedan estar

¹² Es común que las trabajadoras embarazadas decidan emplear las doce semanas en el posparto, independientemente de si el parto se adelanta o no. La causa que se alude frecuentemente, es que prefieren pasar más tiempo con su hijo recién nacido.

con sus hijos. Tal como se ha observado en el punto anterior de este trabajo, quedan varias tareas pendientes de atención a la familia desde las políticas sociales, una de ellas es impulsar un reparto equitativo de las tareas del hogar entre hombres y mujeres.

Se reconoce que las más recientes reformas de 2018 de la Ley Federal del Trabajo son importantes, donde se prohíbe a los patrones o sus representantes: “exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en un empleo; despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores” (La Ley Federal del Trabajo, 2018, p. 33).

Sin embargo, se reitera, falta un largo camino por recorrer en el impacto directo a las familias mediante el trabajo y la cobertura, ante el gran porcentaje de personas que carecen de estas mínimas prestaciones, por trabajar en el sector informal. Es claro que la política social y la ley avanza lentamente respecto a las necesidades de protección familiar, en consecuencia, surge el cuestionamiento: ¿en México existen políticas familiares, o solo se ha llegado a un nivel genérico e indirecto de atención a la familia, a través de políticas sociales? Con objeto de ofrecer un primer acercamiento a la respuesta, en el siguiente apartado se analizan las funciones radicales de la familia que el Estado debe atender y que justifican ampliamente una política familiar, los retos de la política familiar y los campos de la política social en México. La atención a la familia tendría que tener como protagonista a la misma institución familiar, desde su participación activa como primera sociedad, y en la sociedad global. En el capítulo quinto se analizan las formas de operar de la política social mexicana, así como los fondos económicos que se invierten en ésta.

4.4. El caso mexicano: ¿Políticas sociales o políticas familiares?

Algunos autores ofrecen pautas para dilucidar si en México han tenido lugar políticas sociales o familiares. Los trabajos de Barba Solano (2007) introducen este tema, al partir de un análisis del comienzo y desarrollo del régimen de bienestar en México. Asevera que el mismo comienzo del régimen no es claro, incluso para algunos, se encuentra en tela de juicio su existencia y, tampoco es certero el carácter de la política social en el lapso entre la promulgación de la Constitución de 1917 y la crisis económica de 1982.

Las figuras centrales para el desarrollo del régimen de bienestar en México se produjeron entre 1940 y 1982. Su lógica fue dual: la del poder político y la estrategia de crecimiento económico, provocando una división de la sociedad como se ve en la tabla 8. En el periodo se dio una reducción de la desigualdad y la distribución del ingreso, una reducción de la pobreza moderada y extrema, y avances en educación y salud, sin embargo los avances estaban muy por debajo de los logros de los regímenes universales de América Latina (Coplamar, 1985).

Las consecuencias se pueden resumir en dos: los altos niveles de exclusión han obligado a las familias a generar diversas estrategias de sobrevivencia y producción de su propio bienestar a través del empleo informal y la migración nacional e internacional. En su momento, el dualismo previo era por omisión al excluir a los campesinos y trabajadores urbanos informales; ahora el dualismo es institucionalizado, dificultando el ejercicio de los derechos sociales. Por tanto, la gestión política se queda corta administrando beneficios limitados a la población en condiciones de pobreza y la desmercantilización debilitada de las instituciones sociales (Valencia Lomelí, 2010). Todas estas consecuencias dan lugar a cuestionar si en México existen políticas familiares, o si las políticas existentes sólo se instalan en la categoría de políticas sociales.

Tabla 9 Los campos de la política social en México, 1940-1982

Seguridad social	Asistencia pública	Derechos sociales
Un medio urbano colmado de instituciones sociales.	Otro rural para el que sólo hubo mecanismos de control y programas focalizados.	-
Ciudadanía social corporativa y titularidad para los trabajadores formales.	Campesinos y trabajadores informales escasamente cubiertos por programas asistenciales; e indígenas excluidos de la asistencia pública.	-
Sistemas institucionalizados para cubrir a la coalición social hegemónica.	Programas sociales de carácter efímero para los pobres rurales.	
Seguro social para los actores sociales organizados.	Asistencia social coyuntural para los pobres urbanos (focalizada en la familia y en los niños).	
Protección universal en el discurso.	Prácticas de exclusión social en la realidad	
Servicios educativos selectivos, crecientemente restrictivos conforme se ascendía de un nivel educativo a otro.	-	Niveles primarios de atención en materia de educación que tendían a la universalidad.
Distintos sistemas de seguridad social que separan lo público de lo privado y lo militar de lo civil, combinados con servicios especializados de salud para todos los derechohabientes.	Instituciones de salud de corte general, diseñadas para asistir al resto de la población (denominadas “de atención abierta”).	Salud preventiva para todos.
Derechos y titularidades preferenciales para los hombres adultos con empleos formales.	Discriminación a las mujeres y a los jóvenes.	-
Centralización, burocratización y alta selectividad de la política y el gasto de carácter social, que privilegiaban a las zonas urbanas, a las regiones más ricas del norte del país.	Tratamiento discriminatorio para las zonas rurales y las regiones más pobres del Sur de México.	

Fuente: Barba, 2007, p. 50.

Después de veinticuatro años de políticas de estabilización y ajuste económico, se ha apostado por el bienestar social a través del mercado y enfrentando los problemas de pobreza como temas individuales, no estructurales. Esto deja de lado la ampliación de

los derechos. El régimen de bienestar mexicano se encuentra atrapado en viejas prácticas de clientelismo político que se actualizan en cada administración federal y un presente que no llega a ser bienestar social, o por lo menos no es satisfactorio. Falta una integración y progresión del mismo y observarlo para planear e implementar estrategias compatibles con la solución de problemas sociales históricos y procesos de reforma social (Barba, 2007).

En el nuevo escenario, o lo que se ha hecho, y es rescatable desde entonces, se sintetiza y destaca lo siguiente: “el declive del modelo familiar del hombre proveedor y la mujer reproductora;...la desarticulación de una política económica y una política social, que sólo premiaban la coalición industrializadora: el afianzamiento de la disciplina fiscal como requisito para diseñar y operar la política social: la muerte de una reforma agraria que era empleada; la aparición de conceptos como “exclusión social”, “vulnerabilidad”, “igualdad de oportunidades”, “superación de la pobreza”...la posibilidad de continuar la reforma del régimen de bienestar social valorando la participación democrática...” (Barba, 2017, pp. 63-64).

Como gran parte de lo que sigue faltando en la política social, a la fecha, es lo que Corredor (2007, citado en Arriagada) asevera, en cuanto a que es fundamental contar con una política pública para la familia, pues de poco servirá avanzar en otros campos si en las comunidades no se da un verdadero proceso de fortalecimiento de las estructuras y lazos familiares, mediante políticas públicas dirigidas especialmente a conseguir este objetivo y favorecer el ejercicio de las funciones estratégicas de la familia. El rezago en el establecimiento de las políticas sociales deriva en deficiencias, o mejor dicho en carencias de una política familiar en varios países Latinoamericanos, y México no es la excepción.

Las consecuencias del rezago en la consolidación de políticas familiares por la falta de reconocimiento de las familias como sistemas dinámicos son múltiples: la pobreza, la marginación, la migración, etc. Loría, (2007, citado en Arriagada, pp. 106-109), añade que las familias están en transformación permanente, el ciclo de vida personal está íntimamente relacionado con la constitución familiar y las etapas que atraviesa la familia desde que nace hasta que muere. A su vez, estas etapas están marcadas por el

desarrollo y consolidación del vínculo familiar, que conlleva movimientos, cambios y ajustes de su propio sistema: constitución de la pareja, nacimiento de los hijos, incorporación de las madres al trabajo, ingreso de los hijos a la escuela, adolescencia, abandono de la casa paterna, conflictos generacionales, reencuentro de la pareja, envejecimiento de la población, por mencionar algunos.

El panorama de operación de las políticas sociales en México denota en primer término, una carencia de política familiar real. Los programas sociales, en los que se encuentra inmersa la atención a la familia son parciales, es decir, se integra, como un elemento más a la institución familiar, en un paquete común de los aspectos referidos a la política social, sin distinguir unos objetivos dirigidos a coadyuvar en las funciones de la familia que señalaban los autores antes citados. Asimismo, se evidencia la falta de articulación entre los propios instrumentos o agentes de la política; a nivel gubernamental, se pierde el sentido y valoración que se otorga a la familia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera amplia, al trasladar su tratamiento al Plan Nacional de Desarrollo, donde se hace casi nula mención de la institución familiar y de su lugar en la agenda política de México. Antes bien, su centro es el desarrollo económico y social, que es necesario y básico, sin embargo, no se echa mano del pilar del bienestar familia. Por ende, se elimina la posibilidad que la participación de esta primera sociedad indispensable, natural e histórica, además reconocida, no como imposición ideológica, sino como una realidad humana.

En el capítulo quinto se concreta cuáles son las formas de operar en México una política social relacionada con la familia, a fin de visualizar a grandes rasgos su campo de atención y el recurso económico que se invierte en la política social. Los esfuerzos recientes que el gobierno ha hecho para establecer una política social, que de alguna manera se vinculan con la familia, han sido importantes pero no suficientes. Los más destacados respecto a la atención o protección directa a la familia son el Programa Oportunidades, la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Integral Familiar (SNDIF), y la asistencia social que se referirá enseguida. Otros apoyos o sistemas de

protección o cuidado a la familia son brindados mediante la iniciativa privada, como también se mostrará en este capítulo.

5. La articulación de las políticas de atención a la familia en México

Montoro y Barrios (2008) afirman que una política familiar conlleva requisitos para su conformación: objetivos, medidas e instrumentos. Los objetivos definen el rumbo de las acciones, qué hacer, cómo hacerlo y cuándo. Algunos de estos objetivos para el caso mexicano, son inspirados en el Plan de Apoyo a la Familia, que en su día fue implementado por del Gobierno de Navarra, España¹³: garantizar una coordinada e integral política de atención a la familia en las acciones gestionadas por los diversas direcciones y departamentos del gobierno mexicano, fomentar la unión social fortaleciendo el peso y la presencia de la familia en el tejido social como estructura de integración de los individuos que la conforman, posibilitar el mejor desarrollo de las familias como institución social fundamental, transmisora de cultura y valores humanos, favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, apoyar a las familias que presentan necesidades especiales, integrantes con capacidades diferentes, adultos mayores enfermos, jefes de familia con trabajo informal y en condiciones de pobreza, etc.

Siguiendo el planteamiento en este apartado de Montero y Barrios, los instrumentos requeridos para llevar a buen término los objetivos, pueden ser varios y concebirse desde diversas perspectivas, con base en estos autores, se destacan la toma de decisiones, los agentes y las modalidades. En México, la toma de decisiones a nivel gubernamental recae en tres agentes principales: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A su vez, cada entidad federativa o provincia toma decisiones a nivel estatal y municipal, estas instancias administran la operación de las políticas. Un segundo agente es el empresarial, que puede ser una vía para conciliar la vida laboral y familiar, en este terreno, queda una amplia agenda de acciones pendientes en México. “Un tercer actor es -o debería ser- la familia. A través de las asociaciones familiares que agregan sus

¹³ El Gobierno de Navarra, aprobó el Plan el 7 de mayo de 2001 y el Parlamento dio su apoyo el 11 de abril de 2002. El Plan, a la fecha ya no es vigente.

intereses, se puede hacer presión e intervenir decisivamente en la definición de problemas y necesidades, la elaboración de medidas y la difusión de las mismas” (Montoro y Barrios, 2008, p. 59). Las modalidades de la toma de decisiones deben mantener un equilibrio entre los agentes o actores, según estos autores, o como llama Esping-Andersen, entre los componentes del bienestar social: el Estado, el mercado y la familia.

Las áreas de acción de la política se delimitan conforme a su objeto: área de vivienda, área de trabajo, área de fiscalización, área de educación, área de ocio. Es en el área de acción social donde recae la atención a las familias. Montoro y Barrios (2008), distinguen dos subáreas:

- a) Familias que tienen necesidades específicas, derivadas de la situación o etapa vital por la que están pasando. Se trata de familias estructuradas, y sus necesidades no están provocadas por patologías inherentes a su propia esencia familiar. Este grupo comprendería: familias con niños menores de tres años en el hogar, familias numerosas, familias con partos múltiples, familias con personas discapacitadas (enfermos o con algún tipo de minusvalía física, psíquica o sensorial), familias que desean adoptar un(os) hijo(s).
- b) Familias que tienen necesidades especiales, derivadas de la existencia de problemas de desestructuración o patologías. Este grupo [...] comprende: familias rotas, familias monoparentales, familias en situación de exclusión social o marginación, familias con problemas de maltrato, familias de inmigrantes, personas solas con problemas, abandonadas por sus familias. (pp. 60-61).

Finalmente, según estos investigadores, las medidas para atender las necesidades y problemáticas de las familias, se definen como “una acción o intervención concreta, con un objetivo claro que determina su existencia, habitualmente llevada a cabo desde una instancia pública (aunque no exclusivamente), que forma parte de un elenco de acciones que definen una política (sectorial, social-familiar, familiar)” (2008, p. 62). Y las dimensiones que articulan las medidas, pueden ser tres:

1. El poder legislativo, que es el medio principal de protección a la familia, incluye la regulación de las uniones, su disolución y sus efectos, relaciones paterno filiales, etc.
2. Las transferencias vía transferencia de ayuda directa a las familias o deducciones de impuestos.
3. Las prestaciones sociales públicas: guarderías, asesorías familiares, etc.

A las dimensiones que articulan las medidas, se suman la multiplicidad de niveles de intervención: “las destinadas a ayudar a superar las crisis temporales a las familias,... a combatir lo que los poderes públicos... consideran como atentados a la integridad de la institución familiar...a incrementar la cohesión, la armonía y la salud familiar en su totalidad (o “políticas e bienestar”)” (Montoro y Barrios, 2008, p. 63). En el apartado que sigue, el caso de México es analizado respecto a las formas de operar la política social engarzada con la familia, ciertos instrumentos y dimensiones que articulan las medidas en torno a esta institución.

5.1 El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Por decreto presidencial, en la Ley de Asistencia Social (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2012), Artículo 22, se estipula que las instituciones que deben velar por las políticas sociales son:

- a) La Secretaría de Salud;
- b) La Secretaría de Desarrollo Social;
- c) La Secretaría de Educación Pública;
- d) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
- e) Los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia;
- f) Los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;
- g) El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;
- h) El Instituto Nacional Indigenista;
- i) El Instituto Mexicano de la Juventud;

- j) El Instituto Nacional de las Mujeres;
- k) Los Centros de Atención Juvenil;
- l) El Consejo nacional contra las Adicciones;
- m) El Consejo Nacional de Fomento Educativo;
- n) El Consejo Nacional para la Educación y la Vida;
- o) La Lotería Nacional para la Asistencia Pública;
- p) Las demás entidades que realicen actividades de asistencia social.

Uno de los esfuerzos que el gobierno mexicano ha realizado desde los años noventa en el tema de política social ha sido la operación del programa PROSPERA cuyo objetivo es contribuir a que las familias que viven en extrema pobreza erradiquen esta condición. El programa inició en 1997 con una cobertura de 300 mil familias en el ámbito rural; con el nombre de PROGRESA, a principios de 2002, atendía a 2.4 millones de hogares, de los cuales, dos terceras partes eran comunidades indígenas. A mediados de 2009 este programa se modificó por OPORTUNIDADES y se incrementó su alcance a los 32 Estados del país, duplicando la cobertura a 4.2 millones de hogares.

En 2014, el programa PROSPERA fue declarado por decreto presidencial programa de inclusión social, los beneficios de becas educativas ampliaron el nivel de educación básica (primaria y secundaria), a media superior (bachillerato y universidad). Actualmente, el programa PROSPERA es operado por la Secretaría de Desarrollo Social, y otorga recursos a casi 7 millones de familias para fortalecer su alimentación, salud, y educación. Incluye entre los beneficios, vincular a las personas con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros. (www.gob.mx, consultado el 24 de julio de 2018). Las familias beneficiarias, además de las becas educativas antes mencionadas, reciben transferencias monetarias condicionadas, complementos alimenticios para niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, servicios de salud preventiva, talleres educativos en materia de salud, nutrición e higiene. Las condiciones solicitadas a los beneficiarios para poder recibir estas medidas son: asistencia a la escuela, a consultas preventivas y a las sesiones

educativas de salud. Este programa constituye en México el instrumento más importante para la superación de la pobreza, con un presupuesto para 2006 de poco más de 35 mil millones de pesos, beneficiando a 5 millones de familias, que representan aproximadamente 25 millones de mexicanos, una cuarta parte de la población total. (Loría, 2007, citado en Arriagada, p. 110).

Sin embargo, quedan pendientes en el abatimiento de la pobreza, que no se ha logrado erradicar, puesto que ha sido insuficiente como único instrumento, y en el trato a la familia, no como un hecho estático, más bien como una realidad dinámica integrada, con sus propios recursos afectivos, culturales, de solidaridad y solución de problemas. Los cambios no han sido significativos y su ritmo es lento (Loría, 2007, citado en Arriagada, pp. 110-111).

Como se ha visto en la encuesta intercensal de 2015, los 119 millones de personas mexicanas se agrupan en 32 millones de familias, con prevalencia de familias compuestas por padre, madre e hijos (71.7% hogares tipo nuclear), seguida por las familias integradas por un núcleo y algún otro familiar: abuelos, sobrinos, tíos, etc. (25.8% hogares tipo ampliado), y las familias formadas por personas que cohabitan pero que no guardan parentesco con el jefe del hogar (2.5% hogares tipo compuesto). Ante este hecho, surgen varios cuestionamientos: ¿Qué se ha hecho en cuanto a política social se refiere?, más aún, ¿Que se ha hecho en México por establecer una política familiar para favorecer desde el pilar del bienestar gobierno la marcha adecuada de las funciones de las familias mexicanas?

Son pocos los esfuerzos que se traducen en programas públicos para las familias, a pesar de que el pilar familiar asume gran parte de los cuidados y trabajos que no conllevan remuneración y que impactan en la economía y el desarrollo del país. Asimismo, los integrantes de una familia son quienes generan riqueza a través del trabajo remunerado, sosteniendo el mercado, en mayor carga o medida, puesto que la riqueza, como se mencionó en el capítulo anterior, está distribuida de forma

extremadamente desigual. La mayoría de los ciudadanos asalariados o los que trabajan en el sector informal mantienen la base grande de las labores del día a día, esto es, los obreros, los empleados del ámbito público o privado, los profesionales que ejercen por cuenta propia y un amplio grupo de la población que no cuenta con seguro social, y trabaja para satisfacer las necesidades más básicas de subsistencia, en ocasiones sin lograrlo del todo. Se queda a deber para la institución familiar atención de calidad, encaminada a favorecer su cohesión o integración, fomentar la prevención de la violencia, del pago justo por el trabajo cotidiano, atender las problemáticas que generan la separación y el divorcio, etc.

Uno de los más destacados esfuerzos a nivel público ha sido la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Integral Familiar (DIF) creado para combatir la vulnerabilidad y exclusión social, entendida como la situación de una persona que no disfruta de los bienes y servicios deseables y de los derechos y garantías individuales mínimos por algún impedimento (Mora, 2001, citado en Macías Tubilla, 2014, p. 5). Los antecedentes de este programa son el Programa Nacional de Solidaridad, PROGRESA y Oportunidades.

“El Estado, históricamente ha considerado como un bien público el contar con una población sana y en buenas condiciones... En la antigüedad, por ejemplo en la escuela mercantilista, se consideraba que población de esta naturaleza otorgaba una mayor probabilidad de conquistar nuevos territorios a través de las guerras y demás expediciones de conquista, pero también, porque una población sana y en situación de suficiencia material resultaba económicamente favorable en comparación con una población enferma y con su productividad de trabajo mermada”. (Macías Tubilla, 2014, p. 14).

De hecho, en nuestros días, las campañas de salud van dirigidas en ambos sentidos, de cuidado personal y de ahorro en salubridad, con la tendencia de limitar los medicamentos y la atención médica de especialistas por cuestiones económicas. Independientemente de la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos en México, los óptimos niveles de bienestar especialmente, el bienestar personal y de salud indican la solidaridad humana y un cierto nivel de estabilidad en lo material (casa, vestido,

alimentación) y no material (relaciones humanas saludables). En este sentido, un órgano de gobierno como el DIF justifica su presencia porque se diferencia respecto a otros programas sociales en que atiende a unos grupos sociales concretos.

Es decir, mientras que el sistema de seguridad social mexicano atiende mediante el seguro social al sistema de pensiones, la prevención y atención de accidentes de trabajo y, la salud de la población asegurada; y, la asistencia social intenta combatir la pobreza, potenciar el desarrollo comunitario y la atención a la población vulnerable, marginada y excluida, el DIF, (normado desde el ordenamiento jurídico máximo de la nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º, la Ley General de Salud. Artículo 172, la Ley de Asistencia Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar), tendría un amplio elenco de funciones.

Estas funciones incluirían: promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad; realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el trabajo a los sujetos de asistencia social; promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y de minusválidos sin recursos; llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez y de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a la Ley General de Salud; realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos y minusválidos sin recursos; poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes; realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez y participar en programas de educación especial; entre otras.

La nueva Ley de Asistencia Social (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2012), en su artículo noveno, asigna las nuevas funciones a la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, en conjunto con el DIF, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, las más relevantes se enuncian a continuación:

- Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asistencia Social.
- Formular las normas oficiales mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social¹⁴, a fin de garantizar la calidad de los servicios, y los derechos de los sujetos de esta Ley.
- Formar personal profesional en materias relacionadas con la prestación de servicios de asistencia social.
- Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades.
- Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social presten las instituciones.
- Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social.
- Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores.

Macías Tubilla (2014) sostiene que con la nueva Ley de Asistencia Social la responsabilidad del DIF se ve limitada a gestionar los servicios que otros organismos

¹⁴ El Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social (2012), entiende como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes: La atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; la promoción del bienestar del adulto mayor; el ejercicio de la tutela de los menores, en los términos legales aplicables; la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar; la protección de los derechos de los niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social; el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad; la prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que la padecen; mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo integral; entre otros.

prestan, al mismo tiempo, se descentraliza la nueva política de asistencia social. Incluso, durante el periodo de actividades 1995-2012 del DIF, aunque se perciben como positivos los esfuerzos que realiza en conjunto con otras instituciones, sin embargo, varios no impactan en la práctica, en la solución de problemas comunes, en la cohesión social, en el ejercicio de derechos a fin de aminorar el riesgo de la sociedad ante las circunstancias desfavorables. Por otra parte, la asistencia social, en la medida en que sea provista de manera ineficiente puede producir efectos negativos derivados de la falla en la selección de los beneficiarios y en el inadecuado costeo fiscal, que implica mayores impuestos de los deseados, de la estructura de asistencia social, producto de un inadecuado manejo administrativo de las dependencias públicas; “estas situaciones se derivan de un deficiente entramado institucional en la medida que permita que el sistema de asistencia social esté afectado por grupos de interés o políticos que monopolicen la participación ciudadana, así como la gestión, administración, transparencia y rendición de cuentas de los programas, por mencionar algunos elementos inherentes a las políticas”. (Macías Tubilla, 2014, p. 282).

Parte del desorden en la gestión del SNDIF ha sido ocasionado por abarcar indicadores que no son parte fundamental de sus programas. Uno de estos indicadores es la pobreza alimentaria, que el SNDIF ha ayudado a aminorar, sacrificando otros indicadores de atención como el desarrollo de capacidades. Otro de los indicadores es la población que no tiene acceso a la seguridad social, el cual se inserta directamente en la dinámica productiva de la economía mexicana y no en el SNDIF. En consecuencia, al tener difuminado el objeto de las políticas, la asignación de los recursos públicos es deficiente por la duplicación de los programas, o porque se destinan los recursos escasos a problemáticas que por ley, correspondería atender a otras instituciones públicas.

La visión actual de la asistencia social ha tenido diversas perspectivas puesto que el concepto de vulnerabilidad ha cambiado con el tiempo, como también lo ha hecho la concepción del Estado de Bienestar del siglo XX, que obedeció a ciertas necesidades y contexto. En la actualidad, en los países desarrollados enfocan su atención a políticas

sociales de activación, lo que significa la búsqueda de la incorporación de compromisos de educación y logro de empleo por los adultos beneficiarios de la política social y para los niños, parámetros de nutrición, escolares y el fomento de su sano e integral crecimiento, de forma que la asistencia social se transforma de paliativo a mecanismo efectivo de inserción social y puesta en práctica de estrategias para el desarrollo social en sentido amplio. En México, continúa la división entre el desarrollo social y el desarrollo económico, omitidos como puntos de engarce de las políticas públicas del país, provocando que las estrategias no culminen en la incorporación de las personas en las políticas productivas y de desarrollo económico. A su vez, si el DIF concibe la exclusión social como privación de algún bien, servicio o derecho relevante, las puras medidas asistencialistas que no promueven la participación activa de las poblaciones sujetas de asistencia social, de manera indirecta obstaculizan la participación de la población en el mercado de trabajo, anulando el derecho y la obligación a la obtención de empleo, lo que se traduce en otra deficiencia de este tipo de programas. Es por esto que las políticas públicas que atienden a la familia son parciales y deficientes.

Adicionalmente, a las deficiencias de la políticas sociales, se observa que el bienestar de las personas se ha entendido como una satisfacción en los planos económicos y alimenticios, de modo fundamental, dejando de lado el ámbito personal, cuando varias investigaciones han dado cuenta de que la plenitud y desarrollo de los seres humanos tiene su origen en la conformación y equilibrio entre su ámbito personal, familiar, laboral, social, material. En consecuencia, otra ausencia, tanto en las políticas sociales como en su forma de definir las y operacionalizar sus indicadores es el ámbito personal, definido por el INEGI (2015d) como el bienestar subjetivo.

En consecuencia, por lo menos a nivel diagnóstico, según el INEGI y FLACSO México (2013), existe un creciente acuerdo a nivel internacional sobre la necesidad de generar indicadores para medir el progreso de las sociedades más allá del PIB. En un foro promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para discutir este tema, Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel en

Economía 2001, sostuvo que: “Nuestras métricas son importantes no solamente porque ellas nos dicen cómo vamos, sino porque ellas sirven de guías en el diseño de políticas” (En INEGI y FLACSO México, 2013).

En este sentido, es importante reconocer que lo que medimos influye sobre lo que hacemos, de manera que si queremos tomar decisiones para fortalecer el progreso y el bienestar social es imprescindible incorporar toda la información relevante... el bienestar subjetivo forma parte de esta información relevante, y es que si el propósito del progreso es incrementar el bienestar de las personas, resulta entonces ineludible conocer lo mejor posible cómo es que ellas están viviendo sus vidas y no limitarse a indagar sobre los insumos materiales... (INEGI y FLACSO, 2013).

La medición del bienestar subjetivo tiene una base científica. Países como Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Holanda, Nueva Zelanda, Canadá, Bután, Filipinas, China, Chile y México han generado estadísticas oficiales sobre el bienestar subjetivo. En 2015f, por primera vez en México, se presentaron los Resultados de Bienestar Subjetivo (BIARE) en relación a mediciones de bienestar objetivo. El BIARE toma en cuenta, además de los bienes y servicios para medir el nivel de satisfacción con la vida, bienes intangibles como la autonomía personal, el sentimiento de logro, de seguridad, de afectos, la familia, los amigos (relacionarse) o el sentimiento de propósito en la vida.

El BIARE Ampliado (2015f) reportó un nivel de satisfacción con la vida de 7.95. De los 80 millones de adultos en el país, 3.6 millones se consideran muy insatisfechos con su vida y 9.8 millones insatisfechos, 32.5 millones satisfechos y 34.8 millones muy satisfechos. 5.7 millones de adultos (7.0% del total) presentan un estado anímico, o balance afectivo negativo; 25.2 millones (31.2%) un estado ligeramente positivo y 49.8 millones (61.8%) un estado anímico predominantemente positivo. Las situaciones con niveles más bajos de satisfacción con la vida y balance afectivo son: no confiar ni en un solo familiar, el no tener amistades, el considerar que no ha tomado decisiones importantes en la vida y el que la drogadicción esté presente en el hogar.

Lo más importante en la vida de las personas es el bienestar subjetivo. Como sostiene el Boletín de prensa del INEGI (2015f), los participantes, al manifestar lo que viven dan cuenta del efecto de elementos multi factoriales en el bienestar de los seres humanos, no limitados a los bienes y servicios que ofrece el mercado o el Estado¹⁵. Puesto que las fuentes principales de satisfacción en la vida son los sentimientos de seguridad, de afecto, de propósito en la vida y la familia, en la que recae normalmente la formación de las fuentes de satisfacción en la vida, y son numerosos los asuntos pendientes de atención de las políticas sociales, no por el hecho de su inexistencia, sino por el hecho de su insuficiencia, falta de calidad y por supuesto de cobertura, se ha señalado que sin restarles méritos, no llegan a impactar en el fomento de los indicadores de la satisfacción de vida mencionados¹⁶.

La relación entre el bienestar subjetivo y el bienestar objetivo es predecible, en cuanto a los factores que integrados, propician que una persona pueda sentirse satisfecha con la vida. Así pues, con base en las entrevistas sobre el bienestar subjetivo, se muestra que la satisfacción con la vida es inferior entre quienes se encuentran en pobreza y en pobreza extrema (7.3), quienes no padecen pobreza manifiestan mejor satisfacción con la vida (8.5). (INEGI, 2015f).

Retomando las aportaciones de Tubilla (2014), a fin de un mejor funcionamiento e impacto del SNDIF propone: el diseño de presupuestos más flexibles, basados en necesidades y resultados estables en el tiempo y participativos, de modo que se eviten en cuanto a presupuestos autorizados y ejercidos; con la finalidad de no duplicar programas sociales es indispensable establecer un padrón único de beneficiarios, así se tendría un registro de todos los programas o subsidios que los beneficiarios reciben, incluyendo su atención personalizada, potenciando sinergias a través del complemento

¹⁵ los cuales deberían incluirse expresamente y de facto en las políticas públicas y en la generación de políticas familiares

¹⁶ así lo evidencian los análisis de programas sociales federales y estatales que se han señalado, Oportunidades, DIF y otros que gestionan la Secretaría de Desarrollo Social, El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, El Consejo Nacional contra las Adicciones.

entre los programas; evitar el uso político de los programas sociales y rendir cuentas con transparencia y profundizar en la especialización y preparación del servicio público para que asista social, humana y responsablemente, promoviendo la participación social en la solución de los problemas (pp. 291-292).

Se carece de un orden en las áreas de atención familiar, por contra, se mezcla el bienestar material, con el bienestar subjetivo que brindan las familias. En los programas del DIF, igual se atiende a la población que solicita apoyo económico para la alimentación, que a los matrimonios que solicitan adoptar un hijo. Al privar un orden lógico, o una organización de la administración de los programas, el recurso limitado, abarca poco si se consideran las necesidades materiales y no materiales de las familias (una despensa - adoptar un hijo). Son abundantes las tareas a realizar en la articulación de medidas para atender las necesidades de las familias, puesto que por un lado el poder ejecutivo estipula unas prioridades, el poder legislativo identifica otras, y las prestaciones sociales públicas son pocas y llegan a menos personas.

5.2. Recursos económicos públicos destinados al desarrollo social

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación, 2017, da cuenta del monto y destino de los recursos públicos, incluyendo aquellos para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y transferencias a los estados y municipios. Interesa destacar para efectos de este trabajo, el presupuesto destinado a desarrollo social. Para 2017, se destinaron 2, 236, 409.9 pesos para desarrollo social, divididos tal como aparece a continuación (ver tabla 13).

Tabla 13. Dinero destinado a Desarrollo Social en 2017

Total para Desarrollo Social = rubros de destino	Monto 2,236,401 9.9	Porcentaje 45.7%	Metas
Protección social	816,615.8	16.7%	300,000 nuevos afiliados al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solteros
Educación	648,820.3	13.3%	7 de cada 10 estudiantes de excelencia que solicitan una beca para estudiar el bachillerato o la universidad obtienen la ayuda, el 77.3% de los jóvenes de 15 a 17 años que cursan el bachillerato
Salud	535,645.2	11.0%	54.9 millones de afiliados al Seguro Popular. PROSPERA, Programa de Inclusión Social, Alimentación, Educación y Salud para 6.7 millones de familias
Vivienda y servicios a la comunidad	195,296.8	4.0%	El 93% de la población cuenta con el servicio de agua potable
Protección ambiental	21,265.0	0.4%	51 especies en peligro de extinción protegidas
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	18,082.2	0.4%	100.9 millones de beneficiados de las actividades artísticas y culturales organizadas
Otros asuntos sociales	684.6	0.0%	El ahorro depositado en instituciones bancarias en México es igual al 62.7% del PIB

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017). Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. México.

El resto del recurso se destina a desarrollo económico 980,071.1 (20.0%), gobierno 333,907.6 (6.8%), gasto corriente y pensiones 2,962,958.3 (60.6%), gasto de inversión 587,429.2 (12.0%), estados y municipios 1,684,728.1 (34.5%). Como se aprecia, el mayor porcentaje de gasto está destinado al gasto corriente y pensiones. El gasto corriente se divide en pago de servidores públicos por su trabajo diario: médicos, enfermeros, maestros, policías y gastos de operación de organismos como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Comisión Federal de Competencia

Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, Comisión de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional Electoral.

En una posterior investigación se proyecta hacer un balance de la eficiencia de estos organismos, el número de personal que labora en las instancias y sus sueldos, porque las cifras reflejan que la prioridad del gobierno en cuanto a gasto, es el propio gobierno, puesto que la cifra de pensiones asciende a una cantidad menor 730,128.9 (14.0%) del gasto corriente y pensiones. Sobresale el dato del gasto en Desarrollo social, referido únicamente mediante el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solteros. El Sistema Nacional de Desarrollo Integral Familiar se omite definitivamente del presupuesto global, lo cual puede deberse a que cada Estado decide cómo distribuir algunos recursos, o porque como se revisó antes, la mayor parte del trabajo lo realizan los voluntarios y por ende es iniciativa privada, según los indicadores provistos por el INEGI en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social. Tal como se anunciaba desde la reforma del SNDIF, donde con el cambio de la ley de asistencia social en 2004, en su artículo noveno, se estableció que su labor se limitaba a gestionar programas, más que atender o resolver problemas de las familias.

En México, existen programas públicos de atención a la familia como el DIF, la asistencia social en los diversos tipos de alojamientos e instituciones responsables en los rubros de rehabilitación de adicciones, casas hogar para adultos mayores y menores de edad, albergues para mujeres e hijos en situación de violencia, hospitales psiquiátricos y de enfermedades incurables, aunque la mayoría de estos servicios se mantienen con recursos privados, el gobierno aporta 41.2% del recurso, asimismo, la mayoría son atendidos por asociaciones civiles, 69.3% y 9.7% por instituciones públicas.

Aunado a lo anterior, tanto en el discurso oficial, como en los campos de la política social en México, desde 1940 a la fecha se ha centrado la atención en la asistencia

pública, con mecanismos de control y programas enfocados, por ejemplo, a campesinos y trabajadores informales e indígenas excluidos de la asistencia pública, a personas que padecen condiciones de pobreza, todo esto con carácter efímero y de escasa cobertura por la cantidad de mexicanos que trabajan de modo informal y que sufren de pobreza. Algunas veces el carácter efímero de estos programas se debe a la falta de continuidad entre una administración federal y la siguiente, en otras ocasiones, el dinero destinado es poco para lograr un alcance significativo a toda la población objetivo, etc. Además, la política familiar que implica el diseño y puesta en marcha de objetivos, medidas e instrumentos para favorecer y proteger las funciones propias de la institución familiar, no se ha logrado. Por tanto, queda camino por recorrer para impulsar, atender y proteger la institución familiar en México desde las políticas públicas.

5.3. Población atendida en alojamientos de asistencia social

La distribución del trabajo que se atiende mediante las políticas sociales operadas en asistencia social, se ha clasificado recientemente por el INEGI en el primer Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS, 2015g), así se puede apreciar quién hace qué y con cuánto dinero. De este último punto da cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el rubro Presupuesto de Egresos de la Federación, 2017. En primer lugar se señala que los objetivos del censo han sido obtener información estadística, respecto de las condiciones de vida de la población que reside en alojamientos de asistencia social, en específico sobre: las características de los inmuebles y los servicios que reciben los beneficiarios, las características sociodemográficas de los residentes beneficiarios y, las del personal que labora en los alojamientos.

Algunos de los temas del Censo son:

- Clasificación de alojamientos: casa hogar para menores de edad, casa hogar para adultos mayores, albergue para indígenas, albergue para migrantes, albergue para mujeres, albergue para personas en situación de calle, centro de rehabilitación para personas con adicciones, hospital psiquiátrico para personas con trastornos mentales, hospital o residencia para personas con enfermedades incurables o terminales, refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
- Población usuaria residente.
- Trabajadores y trabajadoras (con certificación en competencias laborales)¹⁷.

El levantamiento de la información se realizó con base en un directorio de establecimientos de asistencia social, integrado en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la ReD Nacional de Refugios (RNR). La estrategia del censo incluyó la verificación con los DIF estatales, municipales, y las juntas de asistencia privada para completar el directorio, los informantes fueron el director o la directora, administradores responsables del alojamiento. El total de alojamientos cesados fueron 4700, correspondientes a 79.1%. (Ver los resultados en las tablas 10 a 12).

Del universo total del directorio, se censaron 4700 alojamientos, de los cuales, la mayoría, 96.1% tienen residentes. 1239 alojamientos no fueron cesados porque 629 no fueron objeto del estudio del censo al tratarse de comedores comunitarios, internados escolares o residencias estudiantiles, hospitales con atención ambulatoria, estancia de día para adultos mayores, guarderías infantiles, alojamientos que no están en funcionamiento (50.8%), 363 eran locales (29.3%), 98 pertenecían a viviendas

¹⁷ Además se considera el rubro: otros trabajadores, este grupo incluye albañiles, pintores, carpinteros, vendedores y personal en actividades agropecuarias.

particulares (7.9%) , 85 eran edificaciones sin uso (6.9%), 44 no fueron localizados (3.5%), 20 otros (1.6%).

En los resultados de este trabajo de campo del INEGI, se comprueba que a nivel particular se hace más por la asistencia social que a nivel público.

Tabla 10. Alojamientos de asistencia social y su distribución por clase de alojamiento

Alojamientos de asistencia social y su distribución por clase de alojamiento		
Centro de rehabilitación de adicciones	1782	39.5%
Casa hogar para adultos mayores	1020	22.6%
Casa hogar para menores de edad	879	19.5%
Otros albergues*	372	8.2%
Albergue para mujeres	104	2.3%
Refugio de mujeres e hijos en situación de violencia	83	1.8%
Albergue para migrantes	76	1.7%
Albergue de personas en situación de calle	74	1.6%
Hospital psiquiátrico	62	1.4%
Hospital de enfermedades incurables	38	0.8%
Albergue para indígenas	27	0.6%

* Incluye albergues para familiares de personas hospitalizadas

Fuente: INEGI. (2015g). Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS).

Al parecer, las necesidades más apremiantes de la población que se atienden en los alojamientos de asistencia social son de rehabilitación de adicciones (39.5%), casa hogar para adultos mayores (22.6%) esta clase de alojamiento coincide con las cifras que ha reportado el INEGI referentes al envejecimiento de la población, que se ha incrementado en los últimos años y requiere también atención desde el sector público, no sólo del privado. Aunque en México, todavía no es muy común que los adultos

mayores vivan en asilos de ancianos¹⁸, si es cada vez más frecuente que ellos se organicen en grupos para realizar distintas actividades como pasear, bailar, aprender a leer y escribir, o aprender y/o enseñar algún arte u oficio.

Tabla 11. Porcentaje de alojamientos de asistencia social por fuente de sostenimiento

Porcentaje de alojamientos de asistencia social por fuente de sostenimiento	
Donaciones particulares	58.4%
Cuotas de usuarios o familiares	57.6%
Gobierno	41.2%
Empresas o fundaciones nacionales	31.6%
Agrupaciones religiosas	29.0%
Colectas o rifas	23.3%
Productos elaborados por usuarios	10.2%
Organismos internacionales o gobiernos de otros países	7.4%
Fideicomiso	2.0%

Fuente: INEGI. (2015g). Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS).

El porcentaje de alojamientos, según el servicio que prestan es: para alimentos 98.1%, le sigue el servicio médico 86.3%, terapias o pláticas grupales 81.1%, actividades recreativas 79.7%, orientación religiosa 77.6%, medicamentos 76.5%, apoyo psicológico 72.9%. Con un porcentaje menor de 70% de alojamientos, prestan servicios de vestido o calzado, transporte, terapia física, talleres de manualidades u oficios, entre otros.

¹⁸ En México, se llaman asilos de ancianos, en España, por ejemplo, se llaman residencias. Por razones de la atención pública y de la escasa inversión en los servicios sociales, como los que se ofrecen en las casas hogar para adultos mayores suelen contar con una infraestructura mínima.

Son consistentes los datos en cuanto a que sobresale la atención privada en los alojamientos de asistencia social, según se muestra en estos datos de los alojamientos según el servicio que prestan y en las tablas anterior y posterior. Es sabido que en México, la orientación religiosa es ofrecida por las iglesias. Además, las principales fuentes de sostenimiento provienen de donaciones particulares y cuotas de usuarios o familiares.

Tabla 12. Distribución porcentual de alojamientos de asistencia social según figura jurídica

Distribución porcentual de alojamientos de asistencia social según figura jurídica	
Asociación civil	69.3%
Institución de asistencia o beneficencia privada	9.8%
Institución pública	9.7%
Otra o ninguna	7.4%
Asociación religiosa	1.6%
Sociedad civil	1.4%
Sociedad o asociación mercantil	0.8%

Fuente: INEGI. (2015g). Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS).

Aparentemente la población usuaria en alojamientos de asistencia social (118,876) se encuentra atendida por un alto número de voluntarios (31,058). Aunado a lo anterior, el mayor porcentaje de las personas que atienden o prestan sus servicios de tiempo o atención profesional a los usuarios de los alojamientos, pertenece a la asociación civil, y/o a la beneficencia privada, y sólo 9.7% pertenece a una institución pública. Esta situación puede explicar la insuficiencia en la atención a la población usuaria.

Por otro lado, de la población trabajadora en los alojamientos de asistencia social, sólo 41.1% son profesionistas y técnicos, 23.6% trabajadores en el cuidado de personas, cocineros, jardineros y vigilantes, 13.1% trabajadores en limpieza, lavado de ropa y ayudantes en general, 11.8%, funcionarios, directores y jefes, 7.5% recepcionistas, secretarías y otros administrativos, 1.8% conductores de vehículos automotor, 0.4% otros trabajadores según el censo del INEGI (CAAS, 2015g). El prescindir de, por lo menos, un 50% de los funcionarios y administrativos podría ayudar a contar con más profesionistas requeridos para la asistencia social especializada.

5.4. El Frente Nacional por la Familia: un ejemplo de acción desde Tercer Sector

De acuerdo a los temas analizados en los capítulos precedentes, la labor privada de las personas para el desarrollo social es muy importante en cuanto a calidad y presencia, a través de la asistencia social en alojamientos, de los recursos económicos y de tiempo destinados, entre otros. El tipo de trabajo privado, corresponde al denominado tercer sector, conferido a la participación de las organizaciones no lucrativas, que no encuentran cabida en el Estado, o en el mercado. Estas entidades son constituidas de modo formal y organizado. Así pues, el Estado se conforma por administraciones públicas, el mercado por empresas, pomez y economía social, mientras que el tercer sector, por movimientos sociales y pueden tener influencia nacional o internacional. El equipo de la Universidad Johns Hopkins a contribuido con una de las definiciones más completas del tercer sector: “son organizaciones... privadas, tienen existencia institucionalmente separada del Estado; no reparten beneficios... (caso de que existan, deben ser reinvertidos en la propia organización; autónomas...; con participación de voluntarios: la pertenencia a ellas no está legalmente impuesta y atraen un cierto nivel de aportaciones voluntarias de tiempo o de dinero” (Salamon y Anheier, 1999, pp. 19-20 en Alberich, 2018, pp. 31-32).

Una muestra de los esfuerzos del Tercer Sector, esto es, las asociaciones, sociedades civiles y religiosas en favor de la familia mexicana, que corrobora los porcentajes de

asistencia social de 69.3%, 1.4%, y 1.6% respectivamente, es el Frente Nacional por la Familia (FNF). Este surge como rechazo al paquete de iniciativas que se comunicaron el 25 de mayo de 2016 y que pretenden modificar el artículo 4 de la Constitución y el Código Civil. El paquete de iniciativas incluye imponer la ideología de género a los niños mediante los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, y los padres de familia no se podrán oponer porque serían castigados.

México forma parte de los países que promueven la ideología de género, en contraste, no hay apoyo a las realidades que viven las familias, en los aspectos de sus funciones, responsabilidades que van más allá de una ideología, que por serlo no es científica, lo esencial y verdaderamente radical de la institución familiar se atiende mínimamente. El FNF promueve y defiende las instituciones: el matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, y la familia natural, ambas bases de la sociedad, afirman. Dos de las acciones más significativas del FNF por su impacto en la movilización ciudadana, han sido la marcha por la familia y la plataforma del Frente Nacional por la Familia en 2018. La marcha convocada por el FNF, en septiembre de 2016 recibió amplia respuesta, participaron más de 1 millón de personas en todo México y contó con el apoyo del Papa Francisco quien, después de presidir la Misa del Jubileo de los Catequistas y antes de rezar el Ángelus dijo: “me asocio de buena gana a los Obispos de México para sostener el compromiso de la Iglesia y de la sociedad civil en favor de la familia y de la vida, que en este tiempo requieren especial atención pastoral y cultural en todo el mundo” (aciprensa, 2016). La tabla 14 recoge el resumen de los ejes temáticos y las propuestas de la plataforma FNF.

Tabla 14. Contenidos temáticos y propuestas del Frente Nacional por la Familia

Eje temático	Propuesta
Matrimonio	Que la institución jurídica del matrimonio sea respetada como la unión de un hombre y una mujer; evitando que ésta se utilice para incluir sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo.
Derecho de los padres a educar a sus hijos	Incluir en la Ley General de Educación el reconocimiento del derecho que tienen los padres a educar a sus hijos.
Derecho a la vida	Proteger la vida desde la concepción, y que el derecho a la vida sea protegido en las 32 entidades del país
Familia y seguridad	Establecer un plan nacional de prevención del delito, con una perspectiva que incluya la participación social desde la familia, grupos sociales y comunitarios
Familia, libertad de conciencia y de religión en México	México reconoce de una manera muy parcial la libertad de conciencia y de religión, por eso se propone eliminar el segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fundada en la separación del Estado y las Iglesias, que decreta “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes
Familia y economía	Mejorar el ingreso de las familias en México a través de incentivos fiscales para personas morales y físicas. Reducir la pobreza y el hambre

Fuente: Plataforma del Frente Nacional por la Familia (2018).

La influencia del FNF, en conjunto con otras instituciones y sectores de la sociedad, ha repercutido en que la modificación al artículo 4 de la Constitución y al Código Civil no se ha aprobado hasta la fecha.

6. Conclusiones

Los pilares del bienestar social son el Estado, la familia y el mercado, definidos por autores europeos y latinoamericanos, que coinciden en considerarlos elementos esenciales. Son numerosos los estudios donde se analizan las contribuciones de cada pieza del bienestar a la sociedad, incluso se enfatiza que cuando uno de los pilares falla, quien asume el abastecimiento del bienestar, generalmente es la familia. Las investigaciones del estado de bienestar valoran estos tres cimientos, en los que se recarga la estructura de la sociedad, como básicos, aunque en la práctica la situación es distinta en el caso de México. En el entramado de las acciones que se llevan a cabo por parte de la administración pública para el desarrollo social, se ha confundido la política familiar con la política social, por un lado. Es decir, las funciones específicas de la familia, procreación, sostenimiento afectivo y económico, la transmisión de la cultura y los valores humanos, la ayuda mutua entre sus integrantes, la previsión del bienestar subjetivo (afecto, desarrollo de la personalidad, seguridad, etc.), se diluyen y pierden en los aspectos de atención que corresponden más bien al desarrollo social, por ejemplo, la educación, la salubridad, la seguridad, etc.

Por otro lado, el nivel de inversión en desarrollo social, rubro donde se inserta la familia, es escaso. En consecuencia, si el nivel de gasto público refleja el nivel de compromiso con el sector al que está destinado, el grado de compromiso con la familia es bajo. Tal como se muestra en los números dados a conocer por la misma Secretaría de Hacienda mexicana y se observa en ciertos programas sociales dirigidos a la familia como el sistema de Desarrollo Integral Familiar y los alojamientos de asistencia social.

Las consecuencias de esta falta de peso en la valoración real de la institución familiar son varias. Al debilitarse una de las vías indispensables para la provisión de bienestar, se da paso a un desequilibrio en la sociedad. Los problemas de la familia en la actualidad son abundantes, al mismo tiempo, la familia sigue siendo provisor de bienes que no proveen el Estado ni el mercado, por ejemplo los cuidados sin remuneración económica

de sus miembros menores de edad, enfermos, adultos mayores, desempleados, y otros. En contraste, y a pesar de los problemas que conlleva la convivencia familiar, los jóvenes mexicanos han señalado que su fuente de bienestar principal es su familia, hecho reflejado en los resultados de los estudios del INEGI, consistentes con estudios educativos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, etc.

Son múltiples los esfuerzos que se pueden establecer desde el Estado para fortalecer a la familia, por ejemplo, mejorar las políticas de conciliación del trabajo familiar y el trabajo para el mercado, facilitar prestaciones materiales y no materiales para los padres y las madres. Todavía en nuestros días, la mayor parte de las labores del hogar y del tiempo dedicado a los cuidados, lo realizan las mujeres. Por supuesto, se han implementado acciones concretas en favor de la familia, como los permisos por alumbramiento para las mujeres, prohibir a las empresas requerir el comprobante de no embarazo a las mujeres como condición para el contrato o el ingreso, el servicio de guarderías. Aunque hay asuntos pendientes, por ejemplo, en contraposición con las doce semanas que la mujer trabajadora puede disfrutar después del parto, o inmediatamente antes e inmediatamente después, los hombres tienen menos de una semana para estar con su hijo recién nacido y con su esposa, en esta situación.

A pesar de que en México, la familia es valorada por quienes la constituyen, y en el discurso político es proyectada de manera especial, por su relevancia en la sociedad, en la práctica del tratamiento gubernamental quedan tareas por hacer desde una política pública y sobre todo, una política familiar auténtica.

Por tanto, en México, el pilar de la institución familiar ha sido objeto de falta de protección desde varias aristas: el mismo Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo hace mínima referencia a la atención familiar desde los programas públicos y, el gasto en programas dirigidos a las funciones de la familia es, en términos prácticos, inexistente. No así en programas sociales, que benefician a las familias, en cuanto a la

educación gratuita, por ejemplo, aunque persisten a la fecha los serios problemas de calidad y cobertura.

En consecuencia, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo mexicanos requieren una definición del ser humano, o de la persona en relación con la familia y su trascendencia en la sociedad, por lo menos en el mismo nivel en el que se define la relevancia del Estado y de mercado dentro de la sociedad, pues la legitimidad de la familia se debe establecer en los documentos y líneas rectoras para su impulso en la ejecución. Esta definición es urgente llevarla a cabo, a fin de responder a las necesidades que demanda la institución y pilar del bienestar que es la familia, no con retóricas que difuminan o confunden en cuanto a su realidad, o debilitando su importancia, sino con auténticos estudios científicos de su valor y trascendencia en la sociedad mexicana, con el objetivo de revitalizarla, combatir los múltiples rezagos que generan problemas sociales graves como el embarazo de adolescentes, la violencia familiar, el abuso infantil, etc. Así pues, es impostergable una visión de la importancia de la familia, a partir del Estado, con ello, legitimar su presencia y funciones como trascendentes e indispensables en el desarrollo social.

La familia es una realidad, que escapa a las religiones y a las ideologías. La historia constata la realidad familiar desde todos los tiempos, y en nuestros días, en México, así como en otros países es un referente y fuente de desarrollo personal y social. Además, el ámbito científico lo avala, en sus distintas disciplinas: sociológica, jurídica, educativa, antropológica, etc. La estadística apoya esta afirmación, en México, el Instituto Nacional para la Estadística, Geografía e Informática cuenta con resultados en estas facetas. A pesar de que los índices de matrimonio y fecundidad han disminuido, y la tasa de divorcios se ha incrementado, situaciones que implican múltiples problemas al interior de las familias y para la sociedad poco atendidos, la familia sigue siendo un referente importante, como se mencionaba, en un porcentaje elevado de la población es el referente más importante, en cuanto a ocupar el primer lugar como fuente de satisfacción personal. Según el análisis, a lo largo de este trabajo, la mayoría de los

hogares en México, de acuerdo a la última encuesta intercensal del INEGI de 2015, se conforman por hogares nucleares, integrados por el padre, la madre y los hijos, o sólo la madre o el padre con los hijos, o una pareja que vive junta también considerada un hogar nuclear. Esto significa que la relación paterno filial es permanente, por lo menos hasta que los hijos emigran de la casa familiar, independientemente de si existe la pareja del padre y la madre cohabitando, o no, y con las implicaciones de influencia formativa que la relación familiar tiene. Esta realidad, se encuentra igualmente documentada en los resultados de las encuestas nacionales del INEGI, respecto al tiempo de convivencia familiar.

En particular, da cuenta de este hecho la Encuesta de Cohesión Social elaborada y aplicada en los 32 estados del país con el propósito de identificar la percepción de los jóvenes sobre sus contextos más cercanos. Esta encuesta muestra que un alto porcentaje de jóvenes se consideran satisfechos respecto a la relación con su familia, y sus modelos de personas a seguir son, mayoritariamente, integrantes de su familia. Si se considera que los jóvenes encuestados fluctúan en edades de 12 a 29 años, es más significativa cada una de las respuestas, puesto que los jóvenes en etapas tempranas, intermedias y adultas mantienen un marco de referencia continuo en la familia, tanto para sus relaciones en ella, como para contemplar una representación social que les puede servir en la toma de decisiones durante cualquier etapa de la juventud que atraviesen. En estudios educativos, sociológicos y psicológicos se sostiene este aspecto.

Dentro de la política social se contemplan apoyos a las familias de manera indirecta, es decir, la educación básica, pública, gratuita y obligatoria intenta abarcar a toda la población. Sin embargo, aunque la política social atiende un principio universal en su misma concepción, omite un carácter centrado en favorecer las funciones específicas de la familia, como: la ayuda entre los cónyuges, la procreación y educación de los hijos, etc. Se mencionaba, que la relación paterno filial es prolongada en el tiempo, y de alguna manera repercute este vínculo en los distintos ámbitos de desenvolvimiento

como ciudadanos. Queda el cuestionamiento, entonces, sobre qué se hace desde el Estado para favorecer una relación armónica en las familias.

Por tanto, se infiere que México carece de una política familiar, en su lugar, se operan programas de ayuda a las familias de manera directa o indirecta. De manera directa, a través de algunos servicios del DIF, de la asistencia social, y de otras instituciones gubernamentales, y desde el derecho familiar.

En este sentido, el DIF tiene como uno de sus objetivos apoyar el desarrollo de la familia y comunidad. Entre sus actividades destacan el otorgar asistencia jurídica en temas familiares, orientación prematrimonial, guiar y ejecutar trámites de adopción. Asimismo, ofrecen ayuda material a personas de bajos recursos económicos. No obstante, el trabajo concentrado exclusivamente en la familia no se realiza del todo, pues la labor del DIF, a partir de la última reforma de la ley, se limita a gestionar varios programas públicos de asistencia social no dirigidos expresamente a fortalecer las funciones de la familia, o atender y resolver sus problemas.

Por el lado del derecho familiar, existe un tratamiento a la familia, en casos muy concretos, por ejemplo, la generación del contrato matrimonial, la reglamentación de las relaciones entre sus miembros, desde el punto de vista de sus derechos y obligaciones legales, su constitución organización y disolución con base en la ley vigente. De hecho, es relativamente sencillo disolver civilmente el vínculo matrimonial por el recién aprobado “divorcio express” en algunos estados del país, y no se prevé un proceso para una reconciliación o conciliación del vínculo conyugal, realidad que contrasta con las funciones de la familia y con sus propios derechos y obligaciones.

A pesar de esta falta de ayuda del pilar de bienestar Estado, la institución familiar, históricamente ha salido adelante con sus propios recursos, en México, de acuerdo a datos estadísticos de 2014, se revela que mujeres y hombres de 12 años y más de áreas rurales, urbanas e indígenas, de cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de

cinco horas contribuyen a la economía del país sin pago. Las tareas pendientes, en el ámbito de la políticas sociales - familiares sobre una distribución equitativa del trabajo en el hogar son abundantes, puesto que el trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar global, lo hacen sobre todo las mujeres, quienes dedican más del doble de tiempo que los hombres. Siendo que en asuntos de igualdad de derechos y obligaciones, en México se establece teóricamente que es equitativo, en la perspectiva legal y de política social. Por lo que la inconsistencia de lo estipulado y lo que sucede en las familias, es muy elevada.

Por consiguiente, es evidente la desarticulación entre lo que apenas se concibe y opera desde el Estado respecto a la familia, es decir, existe una privación de articulación entre las necesidades familiares y sus ámbitos de servicio o contribución al bienestar social mediante el cuidado y educación de los niños, la atención a los enfermos, la cohesión social, etc., y los objetivos y medidas para favorecer o fortalecer dichos ámbitos. Por el contrario, la integración de los recursos económicos y de esfuerzos y la integración administrativa para estos fines es deficiente. Aunado a esto, se padece de discontinuidad y falta de estabilidad en el fortalecimiento de la familia en el marco de lo público, y no sólo como institución beneficiaria, sino como sociedad primaria o célula básica de la sociedad dinámica, activa, y que aporta múltiples beneficios en sus variadas facetas de desempeño. Asimismo, es claro que el mercado interfiere en la familia con un papel trascendente, ya que el ingreso económico en los hogares mexicanos proviene preponderantemente del trabajo, por lo cual también debe asumir su corresponsabilidad hacia la institución familiar.

Finalmente, las políticas familiares se encuentran ante varios retos en México. Primero, su diseño e implementación para atender a lo que específicamente atañe a las funciones de la familia, seguido de la necesidad de conciliar el trabajo fuera de casa con las labores familiares y ayudar a prevenir y resolver sus problemas específicos, a fin de poder lograr una auténtica protección a la familia y favorecer su cohesión y desarrollo integral. Por ende, el efecto de este bienestar armónico se verá reflejado en los distintos

ámbitos de la sociedad: trabajo, escuela, disminución de problemas de pobreza, desigualdad, trabajo informal, entre otros. De tal modo que los tres pilares del bienestar sean responsables de lo que les atañe. Hasta ahora, los esfuerzos por la familia son operados en buena medida por sectores privados y evidentemente, por la misma institución familiar. Conviene entonces el equilibrio en lo que corresponde hacer a cada pilar del bienestar, dado que al fallar uno, las consecuencias se reflejan en cada una de las estructuras sociales.

Bibliografía

Adelantado, J., Noguera, J. A. y Rambla, X. (2000). “El marco de análisis: Las relaciones complejas entre estructura social y políticas sociales”, en Adelantado, J. (Coord.). *Cambios en el Estado de bienestar*. Barcelona. Caria. pp. 26-31.

Alberich, T. N. (2018). *Tercer sector. La participación de las organizaciones no lucrativas*. Madrid. Dickinson.

Arriagada, I. (Ed.). (2007). “Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias”. *Serie Seminarios y Conferencias* No. 49, División de Desarrollo Social. Chile. CEPAL.

Adame López, Á. G. (Coord.). (2015). *Homenaje a Bernardo Pérez Fernández del Castillo por el Colegio de Profesores de Derecho Civil*. México. Facultad de Derecho-UNAM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4048/6.pdf> Consultado el 25 de agosto de 2018.

Bautista-Farías, J. (2018). “La corrupción en México: cambios y alternativas”. *Análisis plural, segundo semestre de 2017*. Tlaquepaque, Jalisco: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). <https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5352/P3.La%20corrupción%20en%20México.pdf?sequence=2> Consultado el 18 de agosto de 2018.

Baqueiro Rojas, E. y Buenrostro Báez, R. (2009). *Derecho de familia. Colección de textos jurídicos universitarios*. Segunda Edición. UNAM. México. Oxford University Press. <https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=w9diDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=La+familia+en+el+derecho+>

+México&ots=X-7bgPek4M&sig=HcFSIHVKEjU2LcWy2ruXGpy_Yi0#v=onepage&q=La%20familia%20en%20el%20derecho%20en%20México&f=false. Citado el 9 de agosto de 2018.

Barba Solano, C. (2007). “Claroscuros de la reforma social en México y América Latina”. *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*. Vol. XIII No. 39, Mayo-Agosto, pp. 35-76.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Ley de asistencia Social (08/06/2012). *Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 8 de junio de 2012*. http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Ley_AS.pdf Consultado el 2 de agosto de 2018.

Centrángolo, O., Curcio, J., Gómez Sabaini, J. C., Morán, D. (julio de 2018). *Gastos e ingresos públicos en América Latina desde fines de los años ochenta hasta 2015. Tendencias observadas, desafíos actuales y lineamientos de reformas*. 194 Serie Macroeconomía del desarrollo. Santiago. CEPAL y Naciones Unidas.

Corredor, C. (2007). “Los desafíos de una política pública para las familias”, En Arriagada, Irma (Ed.). *Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias*. Serie Seminarios y Conferencias No. 49, División de Desarrollo Social. Chile. CEPAL. pp. 31-34.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 82006). *Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 2006*. pp. 53-55. En línea https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/16775/S2006342_es.pdf?sequence=2&isAllowed=y Consultado el 19 de julio de 2018.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2010). *El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo*. Chile. CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2017). *Panorama Social de América Latina, 2016*. (LC/PUB.2017/12-P). Santiago. CEPAL.

Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL). (2015), sobre la base de Naciones Unidas. “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (A/RES/70/1), Nueva York. En Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2017). *Panorama Social de América Latina, 2016*. (LC/PUB. 2017/12-P). Santiago. CEPAL.

CEPAL (2017). Comunicado de prensa. México. <https://www.cepal.org/es/comunicados/test-comunicado> Consultado el 20 de julio de 2018.

Coplamar. (1985). “Las necesidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000”, Salud, núm. 4. México. Coplamar/Siglo XXI Editores, pp. 400-402.

Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2016). *Medición de la pobreza. Pobreza en México*. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx> Consultado el 31 de julio de 2018.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero de 1917). *Última reforma publicada en el Diario oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Código Civil Federal. Última reforma publicada DOF 9 de marzo de 2018. *Capítulo III De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio*. México. Cámara de Diputados del H. Congresos de la Unión.

De Juana, Á.. ACIPRENSA. 25 de septiembre de 2016. *El Papa muestra apoyo a marcha por la Familia y pide fin de la violencia en México*. <https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-muestra-su-apoyo-a-la-marcha-por-la-vida-en-mexico-y-pide-el-fin-de-la-violencia-46686> Consultado el 14 de agosto de 2018.

Esping-Andersen, G. (2015). "Welfare regimes and social stratification". *Journal of European Social Policy*. 25(1), pp. 124-134.

Filgueira, F. (1998). *El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: Eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada*. San José Costa Rica. FLACSO. http://flacso-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do? Consultado el 20 de julio de 2018.

Flaquer, L. (2000). "Las políticas familiares en una perspectiva comparada". *Colección de estudios sociales*. Núm. 3. Fundación la Caixa. Barcelona. <http://www.ugr.es/~javera/pdf/DOC%205.%20poli.pdf> Consultado el 21 de agosto de 2018.

Frente Nacional por la Familia. (2018). México. <http://es.catholic.net/op/articulos/68104/frente-nacional-por-la-familia.html#modal> Consultado el 14 de agosto de 2018.

Gobernado Arribas, R. "El logro ocupacional como indicador de la organización de la familia" pp.135-151. En Caparrós, Neus; López Dolores; Montoro, Carolina (Eds.) (2003). *Implicaciones del cambio social en la familia*. España. Universidad de Navarra y Gobierno de Navarra.

Gobierno de la República. *Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. Introducción y visión general*. México, pp. 1-19.

Gobierno de Navarra. (2002). *Plan de Apoyo a la Familia. Un marco estratégico para el fortalecimiento de nuestra sociedad*. Navarra.

Goldani, A. M. (2005). “Reinventar políticas para familias reinventadas: entre la `realidad brasileña` y la utopía” en Arriagada, Irma (Ed.). (2007). *Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias*. Serie Seminarios y Conferencias No. 49, División de Desarrollo Social. CEPAL, Chile.

INEGI. (2014). *La informalidad laboral. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Marco conceptual y metodológico*. Aguascalientes. INEGI.

INEGI. (2015). *Características de los hogares*. Aguascalientes. INEGI <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/> Consultado el 31 de julio de 2018.

INEGI. (2015a). *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2014. Principales resultados*. INEGI. México.

INEGI. (2015b). *Encuesta Intercensal. Población*. Aguascalientes. INEGI <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/> Consultado el 31 de julio de 2018.

INEGI. *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014*. Base de datos. En INEGI (2015c). *Mujeres y hombres en México 2015*. Aguascalientes. INEGI

INEGI. (2015d). *Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014. Principales resultados*. Aguascalientes. INEGI.

INEGI e INMUJERES. (2015e). *La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014*. pp. 1-2. Aguascalientes.

INEGI. (2015f). *Indicadores de bienestar subjetivo de la población adulta en México*. Boletín de prensa Núm. 412/15. 20 de octubre de 2015. Aguascalientes. pp. 1-33.

INEGI http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_10_7.pdf Consultado el 6 de agosto de 2018.

INEGI. (2015g). *Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS)*. Aguascalientes. INEGI <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/caas/2015/> Consultado el 11 de agosto de 2018.

INEGI. (2018). *Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el primer trimestre de 2018*. Aguascalientes. INEGI <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4189> Consultado el 31 de julio de 2018.

INEGI. (2017). *Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el cuarto trimestre de 2017*. Comunicado de prensa Núm. 70/18. 13 de febrero de 2018. Aguascalientes. INEGI http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_02.pdf Consultado el 31 de julio de 2018.

INEGI. (2017). *Actualización de la medición de la economía informal, 2003-2016. Preliminar. Año base 2013*. Comunicado de prensa Núm. 547/17. 15 de diciembre de 2017. Aguascalientes. INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/mei/mei2017_12.pdf Consultado el 31 de julio de 2018.

INEGI. (2017). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 ENDIREH Marco conceptual*. Aguascalientes. INEGI.

INEGI y FLACSO México. (2013). *Seminario de bienestar subjetivo: su medición y uso en políticas públicas y toma de decisiones en México*. 17 y 18 de abril de 2013. Aguascalientes. INEGI http://www.inegi.org.mx/eventos/2013/Bienestar_subjetivo/presentacion.aspx Consultado el 6 de agosto de 2018.

INEGI. (2016). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016*. México. Aguascalientes. INEGI.

Minser, J. y Becker, G. En Fleming, R. y Spellerberg, A. (1999). *Using Time Use Data. A history of time use surveys and uses of time use data*. New Zealand, Statistics New Zealand.

Jelin, E. (2005). “Las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones globales. Hacia una nueva agenda de políticas públicas”. Arriagada, Irma, (Ed.), *Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales*. Serie Seminarios y Conferencias No. 46, División de Desarrollo Social. Chile, CEPAL, pp. 69-88. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6801/S05683_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consultado el 30 de julio de 2018.

Ley Federal del Trabajo. *Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 22 de junio de 2018*. México. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. pp 1-260. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf Consultado el 14 de agosto de 2018.

Ley Federal del Trabajo. (18 de junio de 2017). *Reforma Laboral del Artículo 132, fracción XXVII bis*. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Boletín No. 920. Ciudad de México, Fecha de publicación 18 de junio de 2017. <https://www.gob.mx/stps/prensa/tienen-padres-trabajadores-derecho-a-cinco-dias-de-licencia-por-paternidad?idiom=es> Consultado el 14 de agosto de 2018.

Loría, C. (2007). “La experiencia de la gestión del programa Oportunidades de México”, en Arriagada, Irma (Ed.). *Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias*. Serie Seminarios y Conferencias No. 49, División de Desarrollo Social. Chile. CEPAL.

Macías Tubilla, K. (2014). *El estado mexicano y su combate a la vulnerabilidad social del tipo familiar: un análisis de eficiencia del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. España.

Martinez Franzoni, J. (2008). “Domesticar la incertidumbre en América Latina”, *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (RCCS)*. San José. Universidad de Costa Rica. Vol. 5, N°. 2, pp. 216-219.

Martinez Franzoni, J. (2007). *Regímenes de bienestar en América Latina*. Madrid. Fundación Carolina.

Montoro Gurich, C. y Barrios Baudor, G. (Dir.). (2008). *Políticas familiares*. España, EUNSA.

Montoro Gurich, C. (2018). *Apuntes de clase*. Universidad de Navarra.

Mesa Lago, C. (2005). *Las reformas de salud en América Latina y El Caribe: Su impacto en los principios de seguridad social*. Santiago de Chile, CEPAL.

Montaño, S. (2005). “Políticas de familia versus políticas de género?” en Arriagada, Irma (Ed.). (2007). *Gestión y financiamiento de las políticas que afectan a las familias*. Serie Seminarios y Conferencias No. 49, División de Desarrollo Social. CEPAL, Chile.

Mora, H. M. (2001). *Precisiones sobre el concepto de vulnerabilidad*. México, mimeógrafo, p. 6. Citado en Macías Tubilla, Karime. (2014). *El estado mexicano y su combate a la vulnerabilidad social del tipo familiar: un análisis de eficiencia del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. España.

Naciones Unidas, Resolución 70/1 de la Asamblea General, 2015, en CEPAL y Naciones Unidas. (2016). *Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible*. Trigésimo sexto periodo de sesiones de la CEPAL. Ciudad de México, 23 a 27 de mayo de 2016, Santiago pp 1-176.

Nanclares Valle, J. (2018). *Apuntes. Derecho civil del matrimonio y de la familia*. Inédito. Sala de lectura. Máster en Matrimonio y Familia. Id: 0197. Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad de Navarra. España <http://icf.campus-virtual.com/contexto/d.php?s=&palabra=funciones%20de%20la%20familia&codigo=0197#019700130> Consultado el 21 de agosto de 2018.

Orloff, A. S. (1993). "Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States", *American Sociological Association*, 58 (3), pp. 303-328.

Pérez Díaz, J. (2011). "Demografía, envejecimiento y crisis ¿Es sostenible el Estado de Bienestar?" *El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global*. Donosti. Federación de Cajas de ahorros Vasco Navarras, pp. 47-62.

Plataforma del Frente Nacional por la Familia (2018). México <http://frentenacional.mx/quienessomos/> Consultado el 14 de agosto de 2018.

Ubasart-González, G. y Minteguiaga, A. (2017). "Esping-Andersen en América Latina". *El estudio de los regímenes de bienestar*. Volumen XXV. Número 1. 1 Semestre de 2017. pp. 213-236. Política y gobierno.

Valencia Lomelí, E. (2010). "Los debates sobre los regímenes de bienestar en América Latina y en el Este de Asia. Los casos de México y Corea del Sur". *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*. Vol. XVI No. 47, Enero-Abril, pp. 75, 97-98.

Secretaría de Asuntos Jurídicos. Organización de los Estados Americanos (OEA). (2014). *Panorama de la Regulación de la Familia y la Niñez en los Estados Unidos Mexicanos*. México <https://www.oas.org/dil/esp/Panorama%20general%20de%20la%20regulación%20de%20la%20familia%20y%20la%20niñez%20en%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.pdf> Consultado el 9 de agosto de 2018.

SEGOB y CONAPO. (2016). *Anuario de migración y remesas. México 2016*. México, CONAPO y Fundación BBV Bancomer, A.C.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomo XXXIV, Agosto de 2011. *Semanario Judicial de la Federación*. Tesis: P. XXI/2011. México <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=161267&Semanario=0> Consultado el 9 de agosto de 2018.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017). *Presupuesto de Egresos de la Federación 2017*. SHCP México. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf Consultado el 18 de agosto de 2018.